Infancias y Juventudes en re-existencia

N1

Julio 2026

La investigación en infancias y juventudes. Perspectivas, miradas y desafíos en la contemporaneidad

Participan en este número: Diego Beretta, Sara Victoria Alvarado, Carles Feixa, Elena Butti, Andrea Bonvillani, Germán Muñoz, Ernesto Rodríguez, Candy Chévez Reinoza, René Unda Lara, María Isabel Domínguez, Juan Romero y Jhoana Patiño López

Boletín del Grupo de Trabajo:
Infancias y juventudes

CLACSO

Infancias y juventudes en re-existencia no. 1 : la investigación en infancias y juventudes: perspectivas, miradas y desafíos en la contemporaneidad / Diego Beretta ... [et al.]. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2026.
Libro digital, PDF – (Boletines de grupos de trabajo)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-308-320-6

1. Políticas Públicas. 2. Jóvenes. 3. Crisis Económica. I. Beretta, Diego
CDD 305.23

CLACSO

Colección Boletines de Grupos de Trabajo
Director de la colección – **Pablo Vommaro**

CLACSO Secretaría Ejecutiva
Pablo Vommaro – Director Ejecutivo
Gloria Amézquita – Directora Académica
María Fernanda Pampín – Directora de Publicaciones
Gustavo Lema – Director Comunicación e Información

Equipo Editorial
Lucas Sablich – Coordinador Editorial
Solange Victory – Producción Editorial
Valeria Carrizo y Darío García – Biblioteca Virtual

Equipo de Investigación y Grupos de Trabajo
Magdalena Rauch – Coordinadora
Marta Paredes, Rodolfo Gómez, Luna González y Teresa Arteaga

Equipo Comunicación e Información
Noelia Croci – Coordinadora Redes Sociales
Renata Maestrovicente – Diseñadora Gráfica

Coordinadores del Grupo de Trabajo

Diego Beretta

Sara Victoria Alvarado

Rose de Melo Rocha

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB
Ciudad de Buenos Aires | Argentina.
Tel [54 11] 4304 9145
Fax [54 11] 4305 0875
clacso@clacsoinst.edu.ar | <www.clacso.org>

Colección Boletines de los Grupos de Trabajo de CLACSO

NOMBRE BOLETÍN: **Infancias y Juventudes en re-existencia**

GRUPO DE TRABAJO: **Infancias y juventudes**

Coordinadores GT: **Diego Beretta, Sara Victoria Alvarado, Rose de Melo Rocha**

#1 La investigación en infancias y juventudes. Perspectivas, miradas y desafíos en la contemporaneidad

Índice

Presentación Boletín #1
La investigación en infancias y juventudes como práctica política
Diego Beretta

Infancias, Juventudes y Transformaciones Democráticas en América Latina: 15 años construyendo este trayecto
Sara Victoria Alvarado

El juvenicidio como metáfora
Carles Feixa, Elena Butti, Andrea Bonvillani, Germán Muñoz

Género, generaciones y políticas públicas en América Latina: camino recorrido, estado de situación y desafíos futuros
Ernesto Rodríguez

Investigar sin coartada: Desafíos y perspectivas sobre los estudios de juventud en Centroamérica
Candy Chévez Reinoza

Ecuador: reconfiguración necro-neoliberal y emergencia de la sociedad juvenicida
René Unda Lara

Crisis económica, asfixia imperial e impactos para las infancias y juventudes en Cuba
María Isabel Domínguez

Infancias, juventudes y desigualdades en América Latina y el Caribe: desafíos contemporáneos del trabajo agrario juvenil en Chile y Uruguay
Juan Romero

Sembrar paz desde y con la primera infancia: aportes del pensamiento de María Camila Ospina-Alvarado
Jhoana Patiño López y Sara Victoria Alvarado Salgado

Presentación Boletín #1

La investigación en infancias y juventudes como práctica política

Diego Beretta[1]

Presentar este primer número del boletín del Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes es, además de paradójico, un acto de gratitud. La paradoja se avizora al momento de afirmar que es el primer boletín, a pesar que llevamos años de una conversación y trabajo colectivo que permitió desplegar innumerables producciones colectiva como libros, dossiers, investigaciones, materiales audiovisuales, presentaciones en congresos y eventos internacionales, y hasta espacios de formación como diplomaturas, especializaciones y recientemente una maestría. Gratitud, porque en estás próximas páginas se reúnen plumas con las que muchas y muchos nos hemos formado como investigadores, o hemos tenido la oportunidad de compartir espacios académicos, de gestión y de transformación. Así, si bien este es el primer boletín del GT, nace ya con la densidad de una historia y un camino recorrido que refuerza la idea de trabajo de manera colectiva y de la investigación como forma para transformar la realidad.

Desde el equipo de coordinación del GT nos comprometimos a aprovechar este espacio de CLACSO para poder divulgar, difundir y hacer circular los resultados tanto individuales como colectivos de las y los integrantes del grupo. El **GT Infancias y Juventudes** busca reflexionar, investigar, incidir y visibilizar las principales problemáticas y potencialidades de las infancias y las juventudes en América Latina y el Caribe desde una perspectiva crítica, decolonial e interseccional. Nuestro propósito es aportar conocimiento crítico y situado, y generar una comprensión transformadora que reconozca a las infancias y juventudes como sujetos políticos con capacidad de agencia, desafiando las narrativas estigmatizantes y los escenarios de desigualdad persistente en el Sur Global. Así, casi 150 investigadores de 16 países avanzamos hacia lecturas críticas, situadas y relacionales que permitan desnaturalizar las interpretaciones tradicionales sobre las infancias y juventudes, y tensionar los marcos normativos y políticos que continúan reproduciendo su subordinación. Las propuestas del GT buscan incidir en el mejoramiento y comprensión de las situaciones y experiencias que atraviesan las infancias y juventudes de la región, a partir de actividades de investigación (con enfoques comparados de contextos), la difusión de conocimiento a través de distintos medios y formatos, la creación y el fortalecimiento de vínculos con organizaciones de la sociedad civil, activistas, movimientos sociales y políticas públicas en defensa de los derechos de las infancias y juventudes. En definitiva, el GT propone una serie de actividades diversas que tengan como propósito debatir los enfoques epistémicos y metodológicos para abordar las infancias y juventudes, en el marco de tensiones y disputas de sentidos que vienen atravesando las democracias en la región.

En este marco, para este primer boletín se convocó a colegas que son y/o fueron parte del GT desde sus inicios, que tuvieron roles como coordinadores del grupo o como referentes de espacios de formación e investigación. La iniciativa proponía a las y los autores que puedan

---

[1]Argentino, Licenciado en Ciencia Política, Magíster en Gestión Pública y Doctor en Ciencia Política, (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Coordinador del Grupo de Estudio sobre Juventudes y Políticas de Juventud del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR). Co-coordinador del Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes de CLACSO. Actualmente participa del Programa posdoctoral de investigación en Ciencias Sociales, Infancias y Juventudes.

dar cuenta desde sus miradas, las perspectivas y desafíos actuales que tiene la investigación en infancias y juventudes. Así, en este boletín se encontrarán con textos reflexivos que plantean la necesidad de resignificar categorías en los contextos actuales, sobre las dimensiones éticas y políticas de la investigación, resultados de investigaciones que denuncian violencias estructurales, propuestas metodológicas -que sostienen posturas políticas- poniendo en el centro la capacidad de agencia de las niñas, niños y jóvenes.

Celebramos entonces, no solo el estreno formal del Boletín "Infancias y Juventudes en re-existencia", sino también el espacio de circulación -de ideas, afectos, saberes y conocimientos- que cristaliza una convicción que hace años atraviesa a cada integrante de este grupo de trabajo: investigar con y desde las infancias y juventudes no es solo producir datos, es reconocer actores, disputar sentidos, construir lo común, proteger y abrir caminos futuros. En definitiva, implica una práctica política que apuesta por fortalecer los valores de una democracia muchas veces interpelada en la región, en la que las infancias y juventudes sean partícipes y protagonistas.

Agradecemos a las y los autores por el compromiso asumido con el GT Infancias y Juventudes, y aspiramos que estas páginas puedan aportar a sus lectores análisis crítico de la situación de las infancias y juventudes de América Latina y el Caribe, y robustecer la investigación en estos temas no solo como una actividad individual en la búsqueda de certificaciones, sino como una acción política y colectiva que acompañe las luchas y las esperanzas de las nuevas generaciones.

Infancias, juventudes y transformaciones democráticas en América Latina: 15 años construyendo este trayecto

Sara Victoria Alvarado[2]

Las preguntas que nos transformaron

Las preguntas que una sociedad formula sobre sus infancias y sus juventudes nunca hablan únicamente de ellas. Hablan, sobre todo, de las maneras como esa sociedad comprende el presente que habita y de las posibilidades de futuro que es capaz de producir. Quizá por ello, las preguntas que hace quince años nos convocaron a crear el ***Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes*** de CLACSO no son exactamente las mismas que hoy nos reúnen. No porque aquellas hayan perdido vigencia, sino porque América Latina cambió, el mundo cambió y, afortunadamente, también cambiaron nuestras formas de mirar, de escuchar y de pensar junto a niñas, niños y jóvenes.

Mirar estos quince años no significa reconstruir una historia institucional ni enumerar los logros del Grupo de Trabajo. Significa reconocer cómo fueron transformándose las preguntas que orientaron nuestra reflexión al ritmo de las profundas mutaciones sociales y políticas de América Latina. Nuestras categorías no nacieron en la tranquilidad del debate académico, sino en diálogo con una región atravesada por conflictos armados, profundas desigualdades, ampliaciones y regresiones democráticas, movilizaciones sociales, migraciones y nuevas formas de producción política protagonizadas, entre otros actores, por niñas, niños y jóvenes. Fueron esas transformaciones las que desplazaron continuamente nuestras certezas y nos llevaron a comprender que pensar las infancias y las juventudes nunca consistió únicamente en ampliar un campo de conocimiento. Significó, sobre todo, interrogar las posibilidades presentes de la democracia desde uno de los lugares donde esta se produce cotidianamente.

Fue precisamente frente a las miradas adultocéntricas que concebían a niñas, niños y jóvenes como sujetos definidos por aquello que todavía no eran —futuros ciudadanos, futuros trabajadores, futuros adultos— que, hace quince años, nos encontramos en este GT de CLACSO. No nos reunimos porque compartiéramos el paradigma dominante, sino porque, desde distintos países, disciplinas y trayectorias intelectuales, veníamos cuestionando esas formas de comprensión y buscábamos construir otras preguntas, otros lenguajes y otras maneras de producir conocimiento. La riqueza del GT residió precisamente en esa diversidad: no produjo un pensamiento uniforme, sino una conversación latinoamericana que permitió profundizar, complejizar y enriquecer nuestras búsquedas compartidas.

Las investigaciones, los diálogos con movimientos sociales, las experiencias territoriales y, sobre todo, las voces de niñas, niños y jóvenes fueron ampliando nuestras preguntas hasta conducirnos a un giro fundamental: dejar de comprender las infancias y las juventudes únicamente como destinatarias de derechos para reconocerlas como productoras de cultura, de conocimiento, de acción colectiva y de nuevas formas de habitar lo común.

---

[2] Colombiana. Psicóloga, con maestría en desarrollo educativo y social, Doctora en Educación, con estancia postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Directora del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud y del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la universidad de Manizales y el Cinde. Coordinadora de la Red Iberoamericana de Postgrados en infancias y juventudes RedINJU y de la Especialización en Niñez y Juventud de CLACSO. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO Infancias y Juventudes.

Comprendimos entonces que ellas no anuncian simplemente el futuro de una sociedad. Nos permiten comprender el presente desde el cual ese futuro comienza a producirse.
Es desde esa convicción que quisiera releer estos quince años del GT. No para reconstruir una memoria institucional, sino para compartir algunas preguntas que hoy adquieren una renovada urgencia en una América Latina donde resurgen el autoritarismo, las desigualdades y los discursos que buscan reducir la democracia a la administración del poder. Porque, si algo nos han enseñado las infancias y las juventudes, es que la democracia no depende únicamente de la solidez de sus instituciones. Depende, sobre todo, de su capacidad para producir sujetos que puedan imaginar, desear y construir mundos comunes.

La producción de subjetividades políticas en una América Latina que disputa la democracia

Si las preguntas del GT fueron transformándose con el paso de los años, ello no obedeció únicamente a un proceso de acumulación académica. Respondió, sobre todo, a las profundas transformaciones que vivieron nuestras sociedades. Las categorías con las que comenzamos a pensar las infancias y las juventudes fueron interpeladas por una América Latina atravesada simultáneamente por procesos democratizadores y por nuevas formas de exclusión, por la ampliación de derechos y por regresiones autoritarias, por la emergencia de movimientos sociales innovadores y por la persistencia de viejas violencias que parecían resistirse a desaparecer.
En estas dos décadas la región ha experimentado una intensa disputa por los sentidos de la democracia. A momentos de esperanza colectiva les sucedieron escenarios de creciente polarización; a procesos de ampliación de derechos les respondieron proyectos políticos que reinstalaron el miedo, el control y la exclusión como mecanismos privilegiados de organización social. Los conflictos armados no desaparecieron; las migraciones forzadas transformaron profundamente la vida de millones de personas; las desigualdades se profundizaron en muchos territorios; nuevos discursos de odio comenzaron a ocupar espacios crecientes en la conversación pública y, en diversos países, asistimos al fortalecimiento de proyectos políticos que cuestionan abiertamente conquistas democráticas que parecían irreversibles.
No se trata de describir aquí la coyuntura latinoamericana. Se trata de reconocer que este escenario modifica radicalmente las preguntas desde las cuales pensamos la constitución de los sujetos políticos. Porque la subjetividad política nunca se produce al margen de las condiciones históricas. Se configura en medio de relaciones de poder, de experiencias de exclusión y reconocimiento, de prácticas culturales, de memorias colectivas y de horizontes de futuro que una sociedad hace posibles —o imposibles— para quienes la habitan.
Quizá por ello una de las contribuciones más importantes del GT fue desplazar la mirada desde una comprensión normativa de la ciudadanía hacia una comprensión mucho más amplia de la subjetividad política. Durante mucho tiempo, la formación ciudadana fue entendida principalmente como aprendizaje de normas, instituciones y procedimientos democráticos. Sin desconocer la importancia de esa dimensión, nuestras investigaciones fueron mostrando que la construcción de sujetos políticos desborda ampliamente el conocimiento de las reglas institucionales.
La subjetividad política comienza mucho antes de la participación electoral y mucho más allá de ella. Se configura en las experiencias cotidianas de reconocimiento o exclusión; en la posibilidad de tomar la palabra; en las relaciones de cuidado; en la experiencia del conflicto; en las maneras como niñas, niños y jóvenes aprenden a tramitar las diferencias; en los

lenguajes culturales con los que nombran el mundo; en la creación artística; en las prácticas comunitarias; y en las múltiples formas mediante las cuales descubren que su acción puede transformar la vida compartida.

Esta comprensión adquirió una fuerza particular cuando América Latina fue escenario de nuevas movilizaciones juveniles que transformaron profundamente los repertorios tradicionales de la acción política. Muchos de los estallidos sociales recientes mostraron formas de participación que ya no podían comprenderse únicamente desde las categorías clásicas de la protesta. El arte urbano, la música, el performance, las intervenciones estéticas del espacio público, las redes digitales, las experiencias comunitarias de cuidado, las asambleas territoriales y las múltiples expresiones culturales desarrolladas por jóvenes ampliaron significativamente nuestra comprensión de la acción colectiva. No eran simplemente nuevas maneras de protestar. Eran nuevas maneras de producir lo político.

En ellas podía reconocerse una característica que ha atravesado buena parte de las investigaciones desarrolladas por el GT: la acción política no nace únicamente de la confrontación por el poder institucional. Nace también de la capacidad de producir otros sentidos de la convivencia, otras formas de relación, otros modos de reconocer la diferencia y otras maneras de imaginar la vida común. En esa perspectiva, las prácticas culturales dejan de ocupar un lugar secundario para convertirse en uno de los escenarios privilegiados de producción de subjetividad política.

Esta afirmación resulta especialmente significativa en el momento histórico que vivimos. Allí donde proliferan discursos que buscan reinstalar el miedo como principio ordenador de la vida social, donde resurgen narrativas que criminalizan la diferencia y donde las democracias parecen reducirse progresivamente a procedimientos formales de administración del poder, las experiencias desarrolladas por niñas, niños y jóvenes muestran que siguen existiendo capacidades colectivas para producir vínculos, crear sentidos compartidos y abrir horizontes democráticos que no caben completamente dentro de las instituciones existentes.

Es precisamente aquí donde la noción de agencia adquiere una importancia decisiva. No la entendemos como una capacidad individual para alcanzar determinados objetivos ni como una expresión voluntarista de la autonomía personal. La agencia remite a la posibilidad de incidir en la construcción de la vida colectiva, incluso en condiciones profundamente adversas. Es siempre relacional, histórica y situada: se construye con otros, en medio de conflictos, restricciones y oportunidades que los sujetos transforman mediante prácticas de creación, resistencia y acción colectiva. Reconocer la agencia de las infancias y las juventudes no significa desconocer las profundas desigualdades que atraviesan sus vidas; significa afirmar que, incluso en contextos marcados por la pobreza, la guerra, el desplazamiento y las múltiples violencias, continúan produciéndose experiencias capaces de abrir posibilidades democráticas allí donde las condiciones históricas parecen empeñadas en clausurarlas. Es desde esta comprensión que la pregunta por la subjetividad política deja de ser una preocupación exclusivamente académica. Se convierte en una pregunta por las condiciones culturales, éticas y políticas que hacen posible sostener la democracia cuando esta comienza a perder su capacidad de producir horizontes compartidos.

La producción de lo común: entre la potencia instituyente de la cultura y la institucionalidad democrática

Esta comprensión permitió ampliar también nuestra manera de entender la acción colectiva. Durante años las ciencias sociales privilegiaron una lectura de la acción política centrada en

la movilización social, la confrontación y la disputa por el poder. Sin desconocer la importancia de estas dimensiones, las experiencias desarrolladas por niñas, niños y jóvenes nos fueron mostrando otras formas de acción colectiva que difícilmente podían comprenderse desde esas categorías tradicionales.

Las prácticas de cuidado, las experiencias comunitarias, las pedagogías populares, las intervenciones artísticas, las acciones performativas, las formas colaborativas de producción cultural, los procesos organizativos construidos en los territorios, las expresiones estéticas que resignifican el espacio público, las narrativas digitales y las múltiples experiencias de creación colectiva comenzaron a revelar que la acción política no solo confronta el orden existente: también produce nuevas formas de existencia.

Quizá por ello la categoría de **reexistencia** resulta hoy especialmente sugerente. No se trata únicamente de resistir frente a las múltiples formas de dominación que atraviesan nuestras sociedades, sino de producir modos distintos de vivir, cuidar, nombrar, crear y habitar el mundo. En este sentido, la acción colectiva se convierte también en **acción-creación**: no actúa solamente contra un orden, sino que produce realidad. Inaugura lenguajes, genera vínculos, inventa formas inéditas de cooperación, amplía las posibilidades del reconocimiento mutuo y ensaya maneras diferentes de construir lo común. Muchas de las expresiones protagonizadas por las juventudes latinoamericanas en los últimos años —atravesadas por el arte, la música, el performance, la ocupación creativa del espacio público y las nuevas narrativas digitales— muestran precisamente esa capacidad performativa de crear mundos antes que limitarse a denunciarlos. Las prácticas de reexistencia constituyen, por ello, acciones profundamente instituyentes: desplazan el conflicto hacia la construcción cotidiana de otras posibilidades de vida común y anticipan relaciones, sensibilidades y horizontes que todavía no encuentran un lugar pleno en las instituciones existentes.

Desde esta perspectiva, la producción de subjetividad política deja de comprenderse únicamente como formación de ciudadanos capaces de participar en las instituciones existentes. Se convierte en la producción permanente de sujetos que imaginan, desean y crean nuevas posibilidades para la vida democrática. La democracia no aparece entonces como un orden terminado que debe preservarse, sino como una construcción siempre inacabada, permanentemente recreada por quienes amplían las fronteras de lo posible.

Tal vez sea este uno de los aprendizajes más significativos que nos deja el recorrido compartido del GT. La democracia no depende únicamente de la solidez de sus instituciones. Depende, sobre todo, de su capacidad para producir sujetos, acciones colectivas y prácticas instituyentes capaces de recrear continuamente lo común. Allí donde esa capacidad creadora se debilita, las instituciones corren el riesgo de vaciarse de sentido. Allí donde, por el contrario, nuevas subjetividades, nuevos lenguajes y nuevas formas de acción colectiva continúan emergiendo, la democracia encuentra la posibilidad de renovarse incluso en contextos profundamente adversos.

Esta convicción adquiere una relevancia particular en el momento histórico que vive América Latina. Frente a la expansión de proyectos políticos que buscan reducir la democracia a la administración del poder o al ejercicio del control social, las experiencias protagonizadas por niñas, niños y jóvenes recuerdan que toda democracia permanece abierta mientras una sociedad conserve la capacidad de producir nuevos sujetos, nuevos vínculos y nuevos mundos comunes. Quizá allí resida hoy una de las tareas éticas y políticas más urgentes para quienes seguimos pensando, investigando y actuando junto a las infancias y las juventudes latinoamericanas.

Producir democracia en tiempos de incertidumbre: infancias, juventudes y esperanza como práctica política

Las reflexiones construidas a lo largo de estos quince años adquieren hoy una renovada urgencia. No porque las categorías elaboradas por el GT necesiten ser confirmadas por la coyuntura latinoamericana, sino porque esa coyuntura hace visible hasta qué punto las preguntas por las infancias, las juventudes y la producción de subjetividades políticas son, en realidad, preguntas por las posibilidades presentes de la democracia.

América Latina atraviesa un momento histórico marcado por profundas tensiones. Mientras las democracias conservan buena parte de sus procedimientos institucionales, asistimos al debilitamiento progresivo de las condiciones culturales, éticas y políticas que las sostienen. En distintos países resurgen proyectos autoritarios que reducen la política a la lógica del control; se expanden discursos de odio que convierten la diferencia en amenaza y al adversario en enemigo; se restringen derechos conquistados durante décadas; persisten conflictos armados, violencias estructurales y profundas desigualdades; las migraciones transforman los tejidos sociales; y amplios sectores de la población experimentan una creciente desconfianza frente a unas instituciones que, con frecuencia, parecen incapaces de responder a las demandas de reconocimiento, justicia y participación.

No estamos únicamente frente a una crisis de gobernabilidad o de representación. Lo que parece encontrarse en disputa es la capacidad de nuestras sociedades para producir lo común. Allí donde el miedo sustituye la confianza, donde la exclusión reemplaza el reconocimiento y donde la incertidumbre alimenta respuestas autoritarias, la democracia comienza a perder su principal fuente de vitalidad: la posibilidad de seguir produciendo sujetos capaces de imaginar, desear y construir proyectos compartidos.

Por ello, hoy resulta indispensable insistir en una convicción que ha acompañado el trabajo del GT desde sus inicios: la democracia no se reduce a un régimen político ni se agota en el funcionamiento de sus instituciones. Es, sobre todo, una producción histórica, cultural y ética que debe recrearse permanentemente. Las instituciones son indispensables, pero solo conservan su sentido cuando dialogan con una sociedad que continúa generando capacidades de participación, reconocimiento, deliberación, solidaridad y creación colectiva. La democracia es, en este sentido, un orden social y un estilo de vida que se aprende, se practica y se renueva cotidianamente.

Esta comprensión obliga también a ampliar nuestra mirada sobre las formas mediante las cuales la sociedad produce democracia. A lo largo de estos años hemos conocido innumerables experiencias en las que niñas, niños y jóvenes despliegan su capacidad política mediante procesos educativos, expresiones artísticas, iniciativas ambientales, organizaciones comunitarias, lenguajes performativos, prácticas de cuidado, trabajo en redes y acciones de reexistencia que reconstruyen vínculos allí donde parecían imponerse la violencia, la exclusión o la fragmentación. En ellas se anticipan otras maneras de habitar el mundo y de producir lo común.

Pero la experiencia latinoamericana también nos ha enseñado que la producción democrática no transita siempre por caminos de consenso o de creación comunitaria. Cuando las instituciones restringen la participación, cuando las voces son sistemáticamente silenciadas o cuando los derechos conquistados comienzan a retroceder, la acción colectiva encuentra otras formas de expresión. Las movilizaciones sociales, la protesta pública, la desobediencia civil y los estallidos sociales forman parte, en muchos momentos de nuestra historia, de esa capacidad instituyente mediante la cual la sociedad interpela el orden existente y reabre

posibilidades de ampliación democrática. No constituyen la negación de la democracia; con frecuencia expresan el esfuerzo por recuperarla allí donde sus promesas han sido vulneradas. No se trata, por tanto, de oponer unas prácticas a otras. La creación artística, la educación, el cuidado, la organización comunitaria, la movilización social o la desobediencia civil responden a contextos históricos diferentes, pero participan de una misma tarea: ampliar las posibilidades de reconocimiento, justicia y construcción de lo común. La democracia necesita tanto de las prácticas que crean nuevas formas de convivencia como de aquellas que interpelan críticamente las instituciones cuando estas dejan de garantizar la dignidad, la participación o los derechos. Ambas expresan la potencia instituyente de una sociedad que se resiste a aceptar como definitivo cualquier cierre autoritario del horizonte democrático.

Desde esta perspectiva, las niñeces y las juventudes constituyen uno de los lugares privilegiados para comprender el estado de nuestras democracias. No porque representen el futuro de la sociedad, sino porque en sus experiencias presentes podemos reconocer las condiciones desde las cuales ese futuro comienza a producirse. En ellas se hacen visibles tanto las huellas de la desigualdad y la exclusión como las capacidades creadoras con las que nuevas generaciones reinventan los lenguajes de la participación, la solidaridad, la resistencia y la esperanza.

Quizá esa sea también una de las responsabilidades más importantes para quienes investigamos, educamos o construimos políticas públicas junto a las niñeces y las juventudes: contribuir a crear condiciones culturales e institucionales que permitan el despliegue de sus capacidades políticas y de su agencia, reconociendo que la producción democrática de lo común exige mantener abierto el diálogo entre las fuerzas instituyentes de la sociedad y las instituciones llamadas a garantizar derechos y ampliar la justicia.

En este horizonte adquiere un significado particular la esperanza. No una esperanza ingenua que desconozca la profundidad de las crisis contemporáneas, ni una espera pasiva confiada en que el tiempo resolverá por sí mismo las tensiones de nuestras sociedades. La esperanza constituye una práctica ética y política que se produce colectivamente cada vez que comunidades, movimientos sociales, organizaciones, instituciones democráticas y nuevas generaciones deciden seguir creando, resistiendo, cuidando, deliberando, movilizándose e imaginando formas más justas de vida común. Es la convicción de que ninguna regresión democrática logra clausurar definitivamente la capacidad humana de abrir nuevos horizontes emancipadores.

Tal vez esa sea la enseñanza más profunda que las niñeces y las juventudes latinoamericanas han ofrecido al GT durante estos quince años. La democracia nunca está definitivamente conquistada, pero tampoco definitivamente perdida. Su porvenir depende de la capacidad de las sociedades para seguir produciendo subjetividades comprometidas con la dignidad humana, ampliando los espacios de reconocimiento y sosteniendo, incluso en medio de la incertidumbre, la esperanza como práctica colectiva de creación democrática.

A manera de cierre: Seguir produciendo lo común

Quince años de conversación latinoamericana dejan muchas preguntas abiertas y pocas certezas definitivas. Quizá esa sea una de las enseñanzas más valiosas que este recorrido colectivo nos ha ofrecido. Pensar las infancias y las juventudes nunca consistió únicamente en ampliar un campo de conocimiento ni en incorporar nuevos sujetos a la reflexión académica. Significó, sobre todo, aprender a mirar la democracia desde un lugar distinto.

A lo largo de estos años comprendimos que las preguntas por las infancias y las juventudes son, en el fondo, preguntas por el tipo de sociedad que estamos produciendo. Son preguntas por las formas de reconocimiento que hacemos posibles o imposibles; por las maneras como aprendemos a convivir con la diferencia; por las capacidades colectivas para transformar el conflicto en construcción democrática; por los vínculos que sostienen la vida común y por las condiciones éticas, culturales e institucionales que permiten a una sociedad imaginar, desear y construir horizontes compartidos.

Tal vez por ello, en tiempos en los que el autoritarismo reaparece con nuevos rostros, los discursos de odio fragmentan los vínculos sociales y amplios sectores de nuestras sociedades experimentan incertidumbre frente al porvenir, volver la mirada hacia las niñeces y las juventudes adquiere un significado profundamente político. No porque ellas representen un futuro que algún día llegará, sino porque en su presente, en sus prácticas y en sus luchas se hacen visibles las posibilidades de seguir ampliando la democracia.

La esperanza encuentra aquí su sentido más profundo. No es la expectativa ingenua de que los acontecimientos cambien por sí mismos, ni la confianza ciega en el curso de la historia. Es una práctica ética y política que se produce cada vez que comunidades, instituciones democráticas y movimientos sociales deciden no renunciar a la construcción de lo común; cuando una movilización transforma el dolor en exigencia de justicia; cuando una experiencia educativa, artística o comunitaria hace posible que nuevas generaciones descubran que la democracia también se aprende viviendo con otros, reconociendo la dignidad de quienes son diferentes y asumiendo la responsabilidad compartida de cuidar el mundo común.

Quizá esa sea la convicción que permanece después de este largo camino compartido: la democracia nunca está definitivamente conquistada, pero tampoco definitivamente perdida. Existe allí donde una sociedad conserva la capacidad de recrearse a sí misma, ampliar los horizontes del reconocimiento y seguir produciendo sujetos dispuestos a imaginar, desear y construir una vida común más justa.

Las niñeces y las juventudes nos recuerdan, una y otra vez, que esa posibilidad no pertenece al futuro. Comienza siempre en el presente. En cada gesto de cuidado, en cada creación colectiva, en cada palabra que desafía el silencio, en cada movilización que reclama dignidad, en cada institución que decide transformarse y en cada comunidad que se niega a aceptar que la exclusión, la violencia o el miedo constituyan el destino inevitable de nuestras sociedades.

Seguir produciendo democracia será, probablemente, una de las tareas éticas, políticas y culturales más decisivas que el Grupo de Trabajo está llamado a sostener en los años venideros. Si estos quince años nos han dejado una convicción compartida, es que pensar con las infancias y las juventudes seguirá siendo una de las maneras más fecundas de mantener abierta esa posibilidad para América Latina.

El juvenicidio como metáfora [3]

Carles Feixa[4], Elena Butti,[5] Andrea Bonvillani,[6] Germán Muñoz[7]

Lo que no se puede nombrar existe, pero no se ve. De ahí la importancia de encontrar palabras para designar realidades sociales sumergidas o emergentes, por más dramáticas que resulten. Como sucedió con la noción de feminicidio después de que autoras como Radford y Russel (1992) y Lagarde (2006) la nominaran en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, el bautizo oficial de la categoría analítica del "juvenicidio" por José Manuel Valenzuela en su libro *Sed de mal* (2012), abrió el campo del análisis académico del fenómeno primero, y del tratamiento periodístico, político y activista más tarde (el campo del abordaje jurídico, penal, y estadístico todavía está en gestación).

El fenómeno ya existía, pero no se veía. Entre 2010 y 2014 el fenómeno se intensificó y se hizo visible, teniendo como epicentro el centro y norte de México. Dicho periodo se inicia el 31 de enero de 2010 con la masacre de Villa de Salvárcar (Ciudad Juárez, Chihuahua, norte de México), cuando 16 jóvenes estudiantes que participaban de una fiesta fueron ejecutados, y otros tantos resultaron heridos, por 20 sicarios (también jóvenes), por orden de grupos criminales. Acaba por despertar la atención pública el 28 de marzo de 2011, con el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia y de 6 amigos suyos en Cuernavaca (Morelos, centro-sur de México), dando origen al Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad. Y culmina con la masacre de Iguala (Guerrero, centro de México), el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Todos estos casos fueron perpetrados por grupos criminales, aunque en todos ellos se dio la complicidad, por acción u omisión, del Estado, del ejército y/o de fuerzas y cuerpos de seguridad. Las masacres en México se relacionaron con varios casos semejantes sucedidos en Colombia, Brasil, El

---

[3] El presente texto es un avance editorial del libro *El juvenicidio como metáfora*, coeditado por los autores, que está en prensa en la editorial NED, cuya versión en inglés se publicará en la editorial Springer, con el título de *Juvenicide and the Politics of Youth Killings*.

[4] Antropólogo. Doctor por la Universitat de Barcelona y Catedrático en la Universitat Pompeu Fabra. Se ha especializado en el estudio de las culturas juveniles, realizando trabajo de campo en Cataluña, México, Colombia y Marruecos. Investigador Principal del proyecto TRANSGANG del European Research Council, ha coordinado la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad y el *Informe Juventud en España 2024*. Es miembro del GT Infancia y Juventudes de CLACSO desde 2006.

[5] Antropóloga urbana, Doctora por la Universidad de Oxford. Actualmente es profesora adjunta en el Centro de Estudios Internacionales de Sciences Po Paris. Sus intereses de investigación abarcan la juventud, la violencia, el crimen organizado, el activismo y la vivienda informal en América Latina. Su primer libro (NYU Press) consiste en una exploración etnográfica del involucramiento de adolescentes en el crimen organizado en las periferias urbanas de Medellín. Autora de series fotográficas etnográficas y películas participativas co-producidas con jóvenes.

[6] Psicóloga social. Profesora en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Investigadora Adjunta del CONICET en el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi). Profesora Titular por concurso de la Facultad de Psicología en la mencionada universidad. Ha publicado libros y numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y realizado estancias posdoctorales en universidades de México, Colombia y España.

[7] Comunicólogo. Investigador Emérito, por reconocimiento de Colciencias (2018). Docente en Ciencias Sociales, Comunicación y Estudios Culturales en la universidad de Manizales, Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá), Uniminuto (Bogotá). Líder del grupo de investigación 'Jóvenes, Culturas y Poderes' (A1 en Minciencias).

Salvador, Ecuador, Argentina y otros países latinoamericanos. Estos sucesos motivaron la creación del Colectivo *Juvenicidios y Resistencias Sociales* (JUVIR).

El origen del colectivo se encuentra en la mesa redonda sobre "Juventud, derechos y ciudadanías", que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2014 en Manizales, Colombia, en el marco de la *II Bienal Latinoamericana de Infancia y Juventudes*. Hacía casi dos meses que había tenido lugar la masacre de Ayotzinapa, y el recuerdo de los "falsos positivos" colombianos estaba muy presente, por lo que la mesa se convirtió en una reflexión sobre el fenómeno del juvenicidio. Participaron José Manuel Valenzuela, Maritza Urteaga, Germán Muñoz, Carles Feixa y Tatiana Muñoz (también estaban presentes en el auditorio Alexandra Agudelo, Alfredo Nateras, Marisa Feffermann, Candy Chévez, Andrea Bonvillani y Rayén Rovira). Valenzuela, quien había propuesto el término unos años antes en relación con los casos de Ciudad Juárez, lo aplicó en esta ocasión a lo sucedido a los 43 normalistas de Iguala. Urteaga enmarcó la desaparición de los estudiantes en el contexto más amplio de la des-ciudadanización de las juventudes. Germán Muñoz puso en paralelo el caso mexicano con los "falsos positivos" colombianos y propugnó la lucha contra la impunidad en el marco del incipiente proceso de paz. Tatiana Muñoz, vocera de los movimientos juveniles, expresó la necesidad de combatir el juvenicidio desde la resistencia no violenta. Feixa, en un intento de ir más allá del contexto latinoamericano, propuso el término de "juvenicidio moral" para referirse a la discriminación económica y simbólica que sufre la juventud, y lo utilizó para ejemplificar el impacto de la crisis entre la juventud española. El público que llenaba a rebosar el teatro Los Fundadores de Manizales seguía con contenida emoción los parlamentos.

La mesa de Manizales dio origen al libro colectivo *Juvenicido. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España*, coordinado por el mismo Valenzuela (2015), con aportaciones de varios de los autores citados (además de Rossana Reguillo, Hugo César Moreno, Lucia Rangel, Rita Alves y Valeria Llobet). Este libro marcó un punto y aparte en la reflexión comparativa y en la gestación del colectivo. Tras la publicación del libro se organizó un diplomado (primero con el apoyo de CLACSO y después del Colegio de la Frontera Norte), y se convocaron varios encuentros y mesas sobre el tema, en Ciudad Juárez (2016), La Habana (2016), Ciudad de México (2021), Culiacán (2022), São Paulo (2023), Santiago de Chile (2023), Manizales (2023), Lisboa (2023), San José de Costa Rica (2023), Quito (2024) y Les Avellanes-Barcelona (2024). Cabe destacar que, a pesar de las restricciones vividas en esa época, durante la pandemia por Covid-19 el germen de lo que luego sería el Colectivo JUVIR continuó discutiendo en torno al concepto, a través de reuniones mensuales por internet. Fruto de estos encuentros surgieron números monográficos en revistas académicas, como la mexicana *JOVENes* (Valenzuela & Muñoz, 2020), y la colombiana *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* (Muñoz & Feixa, 2022); así como otra publicación colectiva, resultado del evento de Culiacán: *Vidas amortajadas* (Valenzuela & Ayala, 2024). El mismo Valenzuela publicó otros dos libros sobre el tema (2019, 2022), y el resto de miembros del colectivo fueron ampliando la reflexión en publicaciones diversas.

Como culminación de este proceso, el colectivo JUVIR se constituyó formalmente en el encuentro de Barcelona (noviembre de 2024), que contó con el apoyo de la Wenner-Gren Foundation y de la Agencia Española de Investigación, tras unos días de intensa reflexión en el monasterio de Les Avellanes (Cataluña). El colectivo fundador de JUVIR está integrado por trece miembros: el grupo inicial que coincidió en Manizales 2014 (José Manuel Valenzuela, Germán Muñoz, Carles Feixa, Alexandra Agudelo, Alfredo Nateras, Marisa

Feffermann, Candy Chévez, Rayén Rovira y Andrea Bonvillani), y los que se fueron incorporando en los encuentros posteriores (Salvador Cruz, Elena Butti, Jorge Wilson Gómez y René Unda). El colectivo ha vuelto a reunirse en Medellín (agosto de 2025), con el patrocinio de la Universidad Católica Luis Amigó y de las secretarías de juventud de Medellín y de Antioquia, y en Guadalajara, México (febrero de 2026), con el patrocinio de la Universidad de Guadalajara y de CALAS.

El título de este texto alude a la capacidad metafórica del concepto de juvenicidio para representar el lado oscuro del Estado contemporáneo, en la era del capitalismo neoliberal. El juvenicidio aparece como un "hecho social total" (Mauss, 1971) que pone de manifiesto violencias políticas, estructurales, cotidianas y simbólicas latentes. Tanto en América Latina como en el mundo, la consolidación de un modelo económico y social profundamente neoliberal ha llevado a la precarización de aspectos claves de la transición a la edad adulta, como la educación (ideologizada, privatizada, y a menudo inaccesible) y el mundo del trabajo (flexibilización de leyes laborales, tolerancia del trabajo informal, peligroso y sin garantías, desempleo juvenil a los límites). En este contexto, adquirir una vivienda y formar un hogar se ha vuelto, para muchos jóvenes, una meta inalcanzable. Desde estas bases, no sorprende que muchos jóvenes decidan mirar a otro lado, ya sea deconstruyendo el modelo de "transición a la adultez" como lo conocieron de sus padres (dado que ya se ha vuelto imposible de cumplir) o tratando de alcanzarlo de forma violenta o ilícita. Es en este marco que se deben situar fenómenos como la participación de jóvenes en el crimen organizado, la delincuencia o el sicariato, ya que, como lo señalan profundos trabajos etnográficos en este campo, estos jóvenes lo que están haciendo es buscar cumplir metas lícitas de forma ilícita (Bourgois, 1995; Contreras, 2015; Butti, en prensa).

En estos contextos, se presenta el desafío analítico de establecer qué es y qué no es juvenicidio, ya que estos jóvenes suelen ser al mismo tiempo víctimas y victimarios (como sucede, por ejemplo, con el fenómeno del sicariato o de las bandas juveniles). Estos fenómenos se tienden a analizar como parte del campo de estudios sobre la "violencia juvenil", identificada como violencia de jóvenes contra jóvenes. Sin embargo, este marco conceptual, que actualmente domina el campo de estudio sobre muerte de jóvenes, es problemático porque deja de un lado la violencia ejercida contra los jóvenes por parte de las instituciones sociales o del Estado (como los asesinatos por parte de la policía), o incluso por parte de los mismos jóvenes, pero en el cuadro de contextos de precarización permitidos por el Estado. Resulta claro que en el caso del juvenicidio, los grupos de perpetradores directos y víctimas no son tan distintos, sino que, al contrario, muchos jóvenes son empujados por las condiciones estructurales a habitar "zonas de muerte" o "necrozonas" (Valenzuela, 2019), donde pueden a la vez matar o ser matados (Reguillo, 2021).

Se hace por ello necesario consensuar una definición de juvenicidio que sea al mismo tiempo universal (para que tenga validez científica y transcultural), precisa (para delimitar el fenómeno y no banalizarlo) y flexible (para permitir incluir dimensiones y aspectos novedosos). En el encuentro fundacional del Colectivo JUVIR en Barcelona se consensuó la siguiente definición mínima:

> El juvenicidio es la aniquilación sistemática y persistente de personas jóvenes, que opera como un dispositivo de violencia, perpetrado o permitido por el estado, con la complicidad de otros grupos de poder, que se inscribe en procesos de exclusión social, precarización de la vida, estigmatización y criminalización de la juventud, y conduce en último término a la muerte de personas jóvenes. (Juvir, 2024)

Desde el Colectivo JUVIR, estamos convencidos que la definición precedente es conceptualmente importante porque la simple categoría de "homicidio" no logra captar el carácter selectivo y sistémico de la violencia letal contra jóvenes. Sin una lente conceptual distinta, estas muertes permanecen mal caracterizadas y sin respuesta tanto en el ámbito de las políticas públicas como en el académico, de la misma manera en que muchos asesinatos de mujeres fueron inadecuadamente caracterizados e ignorados antes de la formulación del concepto de feminicidio. En este sentido, reconceptualizar los asesinatos de jóvenes como juvenicidios no es simplemente un cambio terminológico: es una repolitización de los asesinatos de jóvenes como resultado de decisiones estructurales.

Referencias bibliográficas

Bourgois, Philippe ([1995] 2003). *In search of respect: Selling crack in El Barrio* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Butti, Elena [en prensa]. *We Are the Nobodies: Youth, violence, and precarity at the bottom of Colombia's drug economy*. New York University Press.

Contreras, Randol (2012). *The Stickup Kids: Race, Drugs, Violence, and the American Dream*. University of California Press.

Feixa, Carles, Butti, Elena, Bonvillani, Andrea, & Muñoz, Geermán (Eds.) (2026, En prensa). *El juvenicidio como metáfora. Genealogías, intersecciones, instituciones, resistencias*. Barcelona: NED.

Feixa, Carles, Butti, Elena, Bonvillani, Andrea, & Muñoz, Germán (Eds.) (2026, In Press). *Juvenicide and the Politics of Youth Killings. Intersectional Perspectives and Institucional Dynamics in Latin America*. Springer.

Lagarde, Marcela (2006). Introducción. En: D. Russell & R. Harmes (Eds.). *Feminicidio: una perspectiva global* (pp. 15-38). UNAM.

Mauss, Marcel (1971). *Sociología y antropología*. Tecnos.

Muñoz, Germán, & Feixa, Carles (2022). Juvenicidios: una mirada global. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 20(3), 1–8.

Radford, Jill & Russell, Diana (1992). *Femicide. The politics of women killing*. Twayne Publishing.

Reguillo, Rossana (2021). *Necromáquina. Cuando morir no es suficiente*. NED.

Valenzuela, José Manuel (2012). *Sed de mal*. El Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma de Nuevo León.

Valenzuela, José Manuel (2019). *Trazos de sangre y fuego. Bio-Necropolítica y juvenicidio en América Latina*. CALAS.

Valenzuela, José Manuel (Coord.). (2015). *Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España*. NED, ITESO, El Colegio de la Frontera Norte.

Valenzuela, José Manuel, & Ayala, Juan Carlos (Coords.). (2024). *Vidas amortajadas. Poderes sicarios, violencias y resistencias sociales*. Tirant lo Blanch.

Web del Colectivo JUVIR

www.upf.edu/web/juvenicidio.

Género, generaciones y políticas públicas en América Latina: camino recorrido, estado de situación y desafíos futuros

Ernesto Rodríguez[8]

Desde la celebración del Año Internacional de la Juventud en 1985, se han desplegado ingentes esfuerzos para conocer más y mejor las condiciones de vida y las subjetividades de las primeras generaciones del ciclo de vida. Al mismo tiempo, se ha trabajado intensamente en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas, planes, programas y proyectos en estos dominios. Sobre las últimas décadas del siglo pasado existen diversas evaluaciones del camino recorrido, entre las que se destacan las que yo mismo presenté a mediados de los años noventa (Rodríguez, 1996 y 1996). Complementariamente, en 2015 propuse incluso las bases de lo que podría ser un posible "Índice de Desarrollo de Políticas Públicas de Juventud" (Rodríguez, 2015) que -lamentablemente- no fue asumido como una herramienta pertinente. Más recientemente, presenté algunas notas centradas en infancias y adolescencias y sus vínculos con diferentes violencias, en un importante seminario de UNICEF realizado en Turín (Rodríguez, 2023).

Sin embargo, desde entonces y hasta la fecha, no existen (salvo algunas excepciones) esfuerzos similares destacados, por lo que correspondería sistematizar algunas notas iniciales (al menos) para caracterizar lo que podría ser una evaluación colectiva al respecto, con el correspondiente señalamiento de los aprendizajes concretados y los principales desafíos a encarar a futuro. Para ello, a continuación, no propongo volver minuciosamente sobre el camino recorrido, sino destacar algunos de los parámetros fundamentales al respecto y presentar algunas propuestas básicas para encarar dicha tarea a futuro, destacando algunos de las grandes aristas a incluir en dicho análisis. De este modo, me gustaría convocar a académicos y animadores de este campo de trabajo, a revisar el camino recorrido, procurando ir más allá de la simple presentación de iniciativas, construyendo marcos teóricos potentes e incorporando herramientas pertinentes, avanzando en la presentación de evaluaciones concentradas en territorios (países, ciudades, localidades urbanas o rurales, etc.) y/o en las diferentes áreas temáticas del caso (educación, inserción laboral, salud, violencias, participación, etc.) tomando como referencia al conjunto de infancias, adolescencias y/o juventudes, o concentrando la mirada en algún sector específico o particular al respecto.

Debo confesar que desde la pandemia (que para mí significó el cierre formal de mi vida activa y la asunción de mi condición de jubilado, como parte de la población adulta mayor) me he alejado de los temas estrictamente "juveniles" y he pasado a mirar las dinámicas poblacionales en su conjunto, desde lo que he denominado en muchos de mis escritos previos como "perspectiva generacional", proponiendo equiparar dicho enfoque con la "perspectiva de género" y con la "perspectiva étnico-racial", a sabiendas de que estamos hablando de perspectivas con diferentes densidades analíticas. Para presentar estas propuestas, me concentro en tres puntos básicos (de los que solemos utilizar en nuestras tareas analíticas): (i) algunas orientaciones conceptuales; (ii) algunas consideraciones metodológicas; y (iii) algunas pautas acerca del tipo de estudios e investigaciones que se podrían desarrollar a futuro -en particular- en el marco de este potente Grupo de Trabajo de CLACSO.

Orientaciones conceptuales

[8] Sociólogo uruguayo, consultor de las Naciones Unidas, especializado en "sociología de las edades".

Como se ha destacado en diferentes talleres y seminarios, en las últimas décadas hemos logrado concretar aportes de gran relevancia en el campo de los diagnósticos de situación (incluyendo los marcos teórico-conceptuales y la generación de evidencia correspondientes) tanto en el campo de las infancias como en el de las juventudes, pero hemos tenido escasa capacidad de relacionar ambos "mundos", desde enfoques teóricos fecundos y potentes. Adicionalmente, hemos aportado menos, en el campo de las políticas públicas correspondientes, y aún en los casos en que concretamos aportes relevantes en estas materias, hemos repetido la modalidad de análisis por separado de ambos sectores poblacionales. Ello nos debería llevar a la necesidad de procurar la superación de tales limitaciones, con enfoques pertinentes, centrados en la integralidad y la interseccionalidad.

En este sentido, hemos asumido que, tanto en infancias como en juventudes, las condiciones de vida sólo pueden analizarse asumiendo que son "situadas" (en el tiempo y en el espacio) y "relacionales" (no se despliegan aisladamente) y no sólo como simples grupos de edad. Consecuentemente, hemos asumido que estos análisis deben hacer un fuerte énfasis en las desigualdades existentes entre generaciones y al interior de las mismas, relacionando a las que son el foco de nuestra labor analítica con las otras generaciones (en especial, las generaciones adultas y adultas mayores). En este sentido, hemos asumido que estamos ante distribuciones desiguales del poder entre generaciones, que se suman y se solapan con otras igualmente relevantes (de género, étnico/raciales, territoriales, etc.) por lo que procuramos operar con el enfoque de "desigualdades múltiples y acumulativas", apoyándonos decididamente en la "interseccionalidad" correspondiente, desde el campo (en construcción) de "sociología de las edades".

Hemos tratado de trasladar todo esto -también- al campo de las políticas públicas, asumiendo que no basta con el (más acotado) enfoque centrado en el combate a la pobreza (promovido aisladamente desde posturas neoliberales) y que tampoco puede reducirse el combate a las desigualdades en general a las existentes en materia de ingresos y/o entre clases sociales, dado que también en este caso estaríamos simplificando una realidad evidentemente mucho más compleja y desafiante, tanto en términos analíticos como en relación al diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. En este sentido, me tocó trabajar estos temas -en particular- en el campo de la salud, centrando la mirada en la región andina y trabajando centralmente con los Ministerios de Salud de la región (ORAS-CONHU, 2022 y 2025).

Como en todo proceso, estas dinámicas conceptuales y operativas han ido evolucionando con diferentes ritmos y modalidades, en los diferentes contextos nacionales y locales específicos, pero procurando contar -siempre y en la medida de lo posible- con enfoques que puedan aportar al análisis comparado de las diferentes realidades específicas. En tal sentido, estamos promoviendo la adopción de aportes provenientes de diversos ámbitos académicos (la sociología, la ciencia política, la antropología, la psicología social, las ciencias de la comunicación, etc.) recurriendo -en particular y como ya fue dicho- a los aportes de la "sociología de las edades" y a la denominada "perspectiva generacional", procurando superar los enfoques más restringidos, centrados en la "creación de espacios específicos para las infancias y las juventudes", especialmente aquellos que se concretan en el campo institucional, en la asignación de recursos, en la promoción de la participación ciudadana, en la defensa y la promoción de derechos humanos y otras esferas similares (Vommaro, Rodríguez, Perozzo, León y Ospina, 2021).

Orientaciones metodológicas

En consonancia con las orientaciones conceptuales presentadas esquemáticamente, importa destacar algunas orientaciones metodológicas que permitan operativizar tales enfoques y perspectivas, brindando herramientas que nos permitan superar las limitaciones mencionadas. Desde este ángulo, sería pertinente analizar las políticas públicas en su conjunto (educación, salud, empleo, seguridad, justicia, etc.) más que las estrictamente identificadas con rótulos explícitos vinculados con infancias y juventudes. Otro tanto podría decirse de las fuentes estadísticas, procurando mirar a nuestro "objeto de estudio" en clave generacional, más que centrando la mirada en encuestas específicas de infancias y/o juventudes. Del mismo modo, nuestra labor debería mirar al conjunto de instituciones operantes en el campo de las nuevas generaciones, más que en las específicamente nominadas con dichos rótulos explícitamente asignados. Asimismo, la asignación de recursos presupuestales (por ejemplo) debería ser mirada -también- con estos "lentes".

Para ello, sería altamente recomendable operar desde la denominada "teoría del cambio", superando la más acotada centrada en "marcos lógicos". Mientras ésta última nos permite contar con una rigurosa visión de la *consistencia* interna de los proyectos a analizar, la primera nos permite contar con una rigurosa visión de la *pertinencia* de las diferentes intervenciones en el campo de las políticas públicas. Si analizamos, por ejemplo, los programas vinculados con la inserción laboral de las personas jóvenes, podríamos decir que en las últimas décadas se ha trabajado con una "teoría del cambio" que sostiene que las carencias a enfrentar son la falta de capacitación y la falta de experiencia, pero al momento de evaluar lo realizado, se evidencia que la pertinencia de tales supuestos, es sólo parcial. Parece mucho más pertinente agregar que lo que falta son oportunidades de empleo y reconocimiento de las capacidades de las personas jóvenes. ¿Cómo se podría expresar la "perspectiva generacional" en este mismo campo de política pública? En la OIT, por ejemplo, estamos promoviendo el siguiente enfoque: las políticas públicas deberían *erradicar* el trabajo infantil, *proteger* el trabajo adolescente, *promover* el empleo juvenil, *asegurar* trabajo decente para la población adulta y *brindar* jubilaciones y pensiones dignas para la población adulta mayor. Todo esto, obviamente, debería formar parte de las políticas nacionales y locales de empleo y no circunscribirse a simples programas piloto, aislados de las mismas. Otro tanto podría decirse de cualquier otra política pública, desde las dinámicas particulares de las infancias y las juventudes.

La formulación y la implementación de políticas, planes, programas y proyectos centrados en infancias y juventudes, a su vez, también debería contar con estas perspectivas, superando decididamente la práctica de formular y evaluar versiones "específicas", que en general guardan una escasa (y hasta nula) relación con los Planes Nacionales y Locales de Desarrollo. Sabemos de sobra que, en todos los países de la región latinoamericana, en un mismo período de gobierno y aún en áreas donde gobiernan los mismos partidos políticos (más allá de cuáles sean sus orientaciones políticas e ideológicas) las contradicciones existentes entre ambas dimensiones son tan evidentes como injustificables. En el campo presupuestal, asimismo, estas perspectivas deberían reformular preguntas básicas que nos hemos planteado durante décadas. Por ejemplo, más que contar con informes que nos muestren cuanto se invierte en infancias y/o juventudes, deberíamos dotar a los presupuestos públicos -como tal- de la correspondiente perspectiva generacional, emulando lo mucho y muy productivo que se viene haciendo desde la perspectiva de género. Desde este ángulo, entonces, importa saber cuánto se invierte en cada generación, pero también y fundamentalmente como se distribuye dicha inversión entre las diferentes generaciones y al interior de las mismas.

Algunos apuntes para renovar y fortalecer las labores a desarrollar a futuro

Como sabemos, las sociedades latinoamericanas se han transformado y complejizado significativamente en las últimas décadas del siglo pasado y lo que va del presente siglo. Contamos con una amplia y fecunda literatura analítica sobre las principales dinámicas al respecto, en un amplísimo abanico de esferas, pero en lo que aquí importa, se destacan tres esferas particularmente relevantes: (i) las dinámicas de la población, (ii) las dinámicas políticas en general y de las políticas públicas en particular (*policy y politics*) (iii) las centradas en las relaciones entre Estado y Sociedad.

Las dinámicas poblacionales han tenido transformaciones impresionantes a lo largo del tiempo, destacándose los procesos de urbanización, el alargamiento de la esperanza de vida y las dinámicas migratorias, tanto entre países como al interior de los mismos. En lo que atañe a los temas centrales de estas notas, importa recordar que el paradigma central de las políticas públicas desplegadas en las últimas décadas del siglo pasado y primeras del presente, centradas en infancias y juventudes, giraba en torno al denominado "bono demográfico", sustentado en la mejor relación entre población activa y pasiva en el campo del desarrollo, lo que ubicaba a las infancias y juventudes como "actores estratégicos del desarrollo" (Rodríguez, 2002). Este "bono" se esfumó y no fue aprovechado en ningún sentido, siendo sustituido -ahora y a futuro- por el envejecimiento poblacional. ¿Con que paradigma nos vamos a orientar en nuestro campo a futuro?

Por su parte, en lo que atañe a las dinámicas políticas, en las últimas décadas del siglo pasado sustentamos nuestras políticas públicas en el desafío de la construcción democrática, saliendo de dictaduras militares y conflictos armados que arrasaron con los derechos humanos y la convivencia pacífica. Hoy, en cambio, estamos ante otros desafíos, más vinculados con las crisis de las democracias (en sus muy diversos formatos) y con el desarrollo de dinámicas ultraconservadoras, legitimadas (por cierto) en el campo electoral en casi todos los países de la región. En paralelo, también se han producido cambios radicales en la dinámica del Estado (nacional, regional y local) que pasó de un achicamiento radical de la mano del neoliberalismo al actual montaje (en proceso) de nuevas formas de Estados autoritarios, que ya no "desmantelan" todo, sino apenas lo que no cierra con los intereses de los grupos dominantes, ligados al capitalismo financiero internacional. Las dinámicas concretas en estas materias son diversas (tanto en sus formas como en los ritmos con las que se van transformando) pero hay que incorporarlas centralmente a nuestras tareas analíticas, siguiendo -por ejemplo- las evaluaciones que realiza la CEPAL (ver, por ejemplo, CEPAL, 2026).

Finalmente, las propias relaciones entre Estado y Sociedad se han ido transformando, pasando del desarrollo de movimientos sociales contestatarios poderosos e irrupciones sociales y políticas de gran porte (con gran protagonismo juvenil), al desmantelamiento en varios de los casos más relevantes, a través de procesos represivos salvajes y del desarrollo de políticas públicas centradas en el control social (especialmente en el campo de la educación) y el retroceso de importantes conquistas logradas (especialmente por los movimientos feministas). En su lugar, ahora se instalan viejos esquemas coercitivos, que tratan de legitimarse en el combate al narcotráfico, pero metiendo en la bolsa todo lo que muestre signos de oposición a las prácticas estatales. El "escudo de las Américas" promovido por la administración Trump (que ahora se amplía al combate a grupos "terroristas de izquierda" (procurando restaurar la "doctrina de la seguridad nacional") es la muestra más evidente de todas estas perversas y peligrosas dinámicas, donde las infancias y las juventudes se ubican en el epicentro, tanto en calidad de víctimas como de victimarios.

Que hacer y cómo hacerlo: Algunas propuestas para la reflexión colectiva

Con base en todo lo dicho, en el marco de esta Propuesta, me gustaría alentar la concreción a futuro de estudios que reúnan -por ejemplo- las siguientes características:

- Revisiones conceptuales sobre las principales dimensiones presentadas en este sentido (desigualdades múltiples, interseccionalidad, teoría del cambio, sociología de las edades, perspectiva generacional, etc.) procurando que dichos enfoques "dialoguen" entre sí.
- Revisiones analíticas de evaluaciones de políticas, planes, programas y proyectos centrados en infancias y juventudes, seleccionando alguna/s esfera/s de política pública (educación y trabajo, salud y calidad de vida, seguridad y justicia, etc.) preferentemente en términos comparados.
- Revisiones analíticas de algún/os grupo/s de infancias y/o juventudes (incluyendo cruces entre edades, género, etnia/raza, territorios, etc.) procurando presentar las inter seccionalidades correspondientes (infancias rurales vulnerables, mujeres jóvenes indígenas, etc.).
- Contrastes entre opiniones y percepciones de diferentes generaciones (por ejemplo, en relación a la política y la ciudadanía) explotando los datos generados desde encuestas de opinión pública, registros administrativos, etc., preferentemente comparando diferentes puntos en el tiempo.

Desde luego, este tipo de propuestas generales deberían ser concretadas a través de propuestas más concretas y operativas, incluyendo ángulos que apenas comenzando a explorar (feministas de derecha, "escuelas protegidas" y/o "escuelas en casa", políticas de cuidado con perspectiva de género y perspectiva generacional, etc.) identificando espacios de trabajo en los que desarrollarlas en cada caso o en cada esfera en particular. Del mismo modo, deberíamos ingresar en el uso efectivo de "nuevas herramientas tecnológicas" (en particular, inteligencia artificial) generando y alimentando algoritmos sobre estos temas con nuestra perspectiva, con el objetivo de poder procesar información en gran escala que, de otro modo, jamás podríamos lograr.

Referencias bibliográficas

Botero Gómez, Patricia e Palermo, Alicia (Coords.) (2013), *La Utopía No Está Delante: Generaciones, Resistencias e Instituciones Emergentes.* CLACSO / CINDE / Buenos Aires.

Botero Gómez, Patricia; De Cássia Alves Olivera, Rita; Leiva, Xochitl y Palermo, Alicia (Comps.), (2019) *Generaciones en Movimiento y Movimientos Generacionales: Colectivos, Movimientos y Comunidades en Resistencia.* CLACSO / Universidad de Manizales, Buenos Aires.

CEPAL (2026), *Panorama de la Gestión Pública en América Latina 2025: Innovar en el Estado para Gestionar las Transformaciones Indispensables.* CEPAL / AECID, Santiago.

Coubés, Marie-Luis; Solís, Patricio y Zabala de Cosío, María Eugenia (Coords.) (2017), *Generaciones, Curso de Vida y Desigualdad Social en México*. El Colegio de México y el Colegio de la Frontera Norte, México.

INEGI (2016), *Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016: Marco Conceptual.* Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México.

Mayer, Liliana; Domínguez, María Isabel y Lerchundi, Mariana (Comps.) (2020), Las Desigualdades en Clave Generacional Hoy en el Escenario Latinoamericano y Caribeño. CLACSO, Buenos Aires.

Morales, Santiago y Magistris, Gabriela (comp.) (2018), *Niñez en Movimiento: del Adultocentrismo a la Emancipación.* Editorial El Colectivo, Buenos Aires.
Paredes, Mariana y Monteiro, Lucía (Coords.) (2019), *Desde la Niñez a la Vejez: Nuevos Desafíos para la Comprensión de la Sociología de las Edades*. ALAS / CLACSO, Buenos Aires.
ORAS-CONHU (2022), *Desigualdades sociales en salud. Línea de base para una recuperación transformadora con inclusión social y sostenibilidad ambiental en los países de la región andina.* Lima. Disponible en https://www.orasconhu.org/sites/default/files/DESIGUALDADES_SOCIALES_EN_SALUD_2022.pdf.
ORAS / CONHU (2025), *Política Andina para la Reducción de las Desigualdades en Salud.* https://www.orasconhu.org/sites/default/files/file/webfiles/doc/Poli%CC%81tica%20Andina%20Desigualdades%20ORASCONHU%202025.pdf
Rodríguez , Ernesto (1995), *Promoción de la Participación de los Jóvenes en los Procesos de Desarrollo de Fin de Siglo en América Latina y el Caribe: Algunas Propuestas para la Acción*. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington.
Rodríguez, Ernesto (1996), *Políticas de Juventud en América Latina en la Antesala del Año 2000: Logros, Desafíos y Oportunidades*. CIID-IDRC, Montevideo.
Rodríguez, Ernesto (2002), *Jóvenes en América Latina: Actores Estratégicos del Desarrollo.* Centro de Investigaciones y Estudios sobre Juventud (CIEJUV), México.
Rodríguez, Ernesto (2015), *Bases para la Construcción de un Índice de Desarrollo de Políticas Sectoriales de Juventud.* CELAJU / UNESCO / OIJ, Montevideo.
Rodríguez, Ernesto et al. (2015), *Juventudes Latinoamericanas: Prácticas Socio-culturales, Políticas y Políticas Públicas.* CLACSO, Buenos Aires.
Rodríguez, Ernesto et al. (2018), *Juventudes e Infancias en el Escenario Latinoamericano y Caribeño Actual.* CLACSO – Universidad de Manizales, Buenos Aires.
Rodríguez, Ernesto (2023), *Exposición de Niños, Niñas y Adolescentes a la Violencia Organizada: Reflexiones desde la Realidad Actual y las Perspectivas en América Latina.* INOCCENTI/ UNICEF, Turín.
Romero, Juan.; Pérez Islas, José Antonio; Vázquez, Melina y Valdez Gonzáles, Mónica (Coords.) (2024), *Nuevas Generaciones de América Latina y el Caribe: Persistencias y Emergencias de las Desigualdades*. CINDE / SIJ-UNAM / CLACSO, Buenos Aires.
Rossel, Cecilia y López, Santiago. (2012), *Edad, Desigualdad y Distribución: hacia la Orientación Etaria de los Estados de Bienestar.* Fundación Carolina, Madrid.
Vommaro, Pablo; Rodríguez, Ernesto; Perozzo, Wanda; León, Daniela y Ospina, María Camila (2021), "Políticas Públicas y Perspectiva Generacional: Reflexiones En y Desde América Latina y el Caribe". Revista *PILQUEN* Volumen 24, Nº 5, Universidad de Comahue, Argentina.
Romero, Ximena; Dulcey Ruiz, Elisa y Brigeiro, Mauro (Comps.) (2009), Hacia una Sociedad para Todas las Edades: Experiencias Latinoamericanas de Relaciones Intergeneracionales. Red Latinoamericana de Gerontología, Santiago.
Yyaschine, Iliana (2015) **¿Oportunidades? Política Social y Movilidad Intergeneracional en México**. El Colegio de México – UNAM, México.

Investigar sin coartada: Desafíos y perspectivas sobre los estudios de juventud en Centroamérica

Candy Chévez Reinoza[9]

Apertura: la pregunta que no debería ser sospechosa

¿Qué significa, hoy, ser joven en Centroamérica? Esta reflexión se sitúa, además, en un contexto donde la misma palabra derechos se vuelve un cuestionamiento, donde enfrentamos un retroceso de los avances que se pensaban logrados en materia de políticas de juventudes, derechos, género y participación. La pregunta parece simple, casi de manual, pero basta sostenerla un momento para que se abra en un abanico de interrogantes menos cómodas: ¿qué significa ser joven cuando el propio Estado te nombra como amenaza antes que como sujeto de derechos? ¿Qué significa proyectar un futuro cuando el horizonte más probable es la migración, la cárcel o la muerte temprana? ¿Qué significa organizarse, participar, tener una opinión política, cuando esos mismos actos —históricamente entendidos como ejercicio de ciudadanía— pueden leerse como indicio de peligrosidad?

Las juventudes centroamericanas —en plural, porque no existe una sola manera de ser joven en la región— han sido históricamente pensadas desde el déficit y la sospecha antes que desde la agencia y el derecho. Dina Krauskopf documentó ya hace dos décadas la fragilidad de las políticas públicas de juventud en Centroamérica: marcos legales dispersos, institucionalidad débil y una tendencia recurrente a formular la juventud como problema a resolver antes que como actoría social a reconocer (Krauskopf, 2003). Esa matriz no ha desaparecido; se ha reconfigurado. Hoy conviven, en un mismo territorio y a veces en una misma biografía, jóvenes que participan en organizaciones comunitarias, colectivos culturales o procesos de incidencia juvenil; jóvenes en el exilio, obligados a rehacer su vida lejos de su comunidad de origen; jóvenes en las cárceles, atrapados en la maquinaria del régimen de excepción; y jóvenes para quienes la precariedad económica y la violencia estructural han convertido la supervivencia cotidiana en la forma más urgente —y a menudo la única posible— de agencia.

Es en ese cruce donde se instala el concepto de juvenicidio: no como metáfora, sino como categoría analítica que nombra la eliminación sistemática, gradual y muchas veces silenciosa de poblaciones jóvenes precarizadas, sea por la vía directa de la violencia letal o por la vía lenta de la exclusión económica, la estigmatización y el abandono institucional (Valenzuela Arce, 2015). Pensar el juvenicidio en clave centroamericana obliga a mirar más allá de las cifras de homicidios: obliga a mirar también el exilio forzado de miles de jóvenes que huyen no de la pobreza en abstracto, sino de estructuras de violencia y desprotección que el Estado no logra —o no quiere— desmontar (UNICEF, 2018). Cada ruta migratoria interrumpida, cada joven deportado a un país que ya no le ofrece nada distinto de lo que huyó, es también una forma de juvenicidio: la negación sostenida de un futuro habitable.

Y sin embargo, junto a esa desesperanza, persisten las juventudes que se organizan, que ocupan espacios comunitarios, que hacen arte, que documentan memoria, que insisten en nombrar lo que otros prefieren silenciar. Rossana Reguillo Cruz llamó a esto, ya desde el

---

[9] Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Master en Desarrollo Local y Psicóloga social. Docente e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Consultora Internacional. Integrante del GT de Infancias y Juventudes de CLACSO.

cambio de siglo, “estrategias del desencanto”: formas de reconstrucción de sentido y de acción colectiva que las juventudes latinoamericanas despliegan precisamente allí donde las instituciones tradicionales —la escuela, el trabajo, la política formal— han dejado de ofrecer certezas (Reguillo Cruz, 2000). Esa coexistencia entre exilio, desesperanza y resistencia organizada es el terreno mismo donde investigar juventudes en Centroamérica se vuelve, simultáneamente, necesario y peligroso: necesario porque sin ese conocimiento no hay política pública ni acompañamiento posible; peligroso porque nombrar las causas estructurales de la violencia juvenil —y no solo sus síntomas— empieza a leerse, en contextos cada vez más autoritarios, como un acto de complicidad antes que de comprensión. Ese es el nudo que este texto busca desatar.

Un campo sin piso: la fragilidad de los estudios de juventud en Centroamérica

Antes de preguntarnos por qué investigar juventudes se ha vuelto sospechoso en la región, es necesario reconocer un problema previo: en Centroamérica casi no existe, como tal, un campo consolidado de estudios de juventud. A diferencia de México, Chile, Colombia, Brasil o Argentina, donde tres o cuatro décadas de programas de posgrado, redes de investigadores y revistas especializadas han permitido acumular teoría propia sobre lo juvenil, en Centroamérica la producción de conocimiento sobre juventudes sigue siendo dispersa, intermitente y dependiente de coyunturas antes que de trayectorias institucionales sostenidas. No hay, en la mayoría de los países del istmo, programas de maestría o doctorado dedicados específicamente a juventudes; la reflexión sobre lo juvenil aparece más bien como línea secundaria dentro de la psicología, la sociología o el trabajo social, sin lograr constituirse en objeto de estudio con derecho propio.

Esa fragilidad institucional tiene una correlación presupuestaria clara. La región centroamericana arrastra, desde hace décadas, un rezago sostenido en inversión en investigación e innovación: comparada con países como Colombia o Chile, la producción científica registrada por universidades centroamericanas —públicas y privadas— es marginal, y esa debilidad estructural del sistema de ciencia y tecnología atraviesa, con particular severidad, a las ciencias sociales y, dentro de ellas, a los estudios sobre juventud (El Independiente, 2024). El propio dato regional sobre inversión en juventud confirma el patrón: pese a que las personas jóvenes representan cerca de tres de cada diez habitantes de Iberoamérica, solo el 12.2% del gasto público social se destina, directa o indirectamente, a este sector, lo que configura —según el cálculo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Iberoamericana de Juventud— un déficit cercano al 50% respecto de lo que correspondería a su peso demográfico (CEPAL/OIJ, 2014). Si el gasto público en juventud es residual, la inversión en conocimiento sobre juventud lo es todavía más: se investiga poco porque se invierte poco, y se invierte poco porque, institucionalmente, la juventud no termina de constituirse como prioridad de Estado sino como línea de proyecto financiada desde fuera.

Y es aquí donde aparece el segundo problema, más silencioso que el presupuestario: durante años, la mirada dominante sobre las juventudes centroamericanas no ha sido construida por comunidades académicas propias, sino heredada de los organismos de cooperación internacional. Programas financiados por agencias de cooperación, fondos de Naciones Unidas y ONG internacionales han producido la mayor parte del diagnóstico disponible sobre juventud en la región, generalmente bajo lógicas de intervención —prevención de violencia, empleabilidad, salud sexual y reproductiva— más que de comprensión sociohistórica. Esa mirada, útil en muchos sentidos, ha tendido a reproducir lo que Claudio Duarte Quapper ha

teorizado como adultocentrismo: un sistema de dominio en el que la adultez institucional —encarnada aquí en el organismo cooperante, el funcionario, el diseñador de políticas— define qué es un joven, qué necesita y qué riesgo representa, sin que la propia juventud sea reconocida como sujeto de conocimiento y no solo como población meta (Duarte Quapper, 2015). El resultado es un campo de estudios que, en Centroamérica, ha crecido más al ritmo de los ciclos de financiamiento de la cooperación que al de una comunidad académica autónoma capaz de sostener preguntas propias, acumular teoría situada y disputar, desde la investigación misma, el relato oficial sobre quiénes son y qué representan sus juventudes.
Ese vacío —de institucionalidad, de presupuesto, de autonomía epistémica— es el terreno fértil sobre el que, como veremos, terminan por sembrarse las actuales formas de criminalización de la investigación social sobre juventudes.

De la comprensión a la sospecha: cómo se criminaliza investigar

Investigar juvenicidio, pandillas o violencia juvenil en Centroamérica obliga, tarde o temprano, a preguntar por las causas, qué empujó a ese joven hacia la estructura criminal, qué le faltó, qué historia lo antecede. Es una pregunta elemental para cualquier ciencia social. Y, sin embargo, en contextos de populismo punitivo, hacerla empieza a sentirse como un riesgo. Jeannette Aguilar Villamariona ha mostrado cómo, en El Salvador, el tránsito de la Mano Dura al régimen de excepción ha instalado un relato binario que no deja espacio intermedio: solo existen el criminal y el ciudadano de bien (Aguilar Villamariona, 2024). Quien intenta introducir matices —explicar, contextualizar, historizar— corre el riesgo de ser leído como cómplice de aquello que estudia.
Detrás de ese riesgo hay una confusión que no es ingenua, sino útil al poder, la que equipara comprender con justificar. Explicar por qué un joven fue reclutado por una pandilla no lo absuelve a él ni a la estructura que lo captó; es, más bien, la condición mínima para diseñar cualquier respuesta que no sea puramente represiva. Pero en un régimen que ha normalizado la suspensión de garantías y la detención masiva, ese ejercicio analítico puede caer bajo categorías penales tan amplias como imprecisas —la apología del delito, la asociación ilícita— que no fueron pensadas para la investigación académica, pero que dejan cualquier discurso crítico sobre la violencia juvenil expuesto a esa lectura (Amnistía Internacional, 2023). La apología del delito termina funcionando menos como figura jurídica que como frontera invisible: no necesita procesar a cada investigador; le basta con instalar la sospecha como posibilidad latente para que buena parte del conocimiento crítico simplemente deje de intentarse.

El Salvador como caso: régimen de excepción y clausura del pensamiento crítico

El Salvador es, en este sentido, un caso que aporta a toda la región. Desde marzo de 2022 el país vive bajo un régimen de excepción que ha significado decenas de miles de detenciones, la mayoría de jóvenes de sectores precarizados o defensores de derechos humanos, bajo la suspensión de garantías constitucionales básicas, Aguilar Villamariona lo describe como un dispositivo juvenicida sin precedentes en la historia reciente del país (Aguilar Villamariona, 2024). Pero la clausura del pensamiento crítico no se ha quedado en las cárceles, se ha extendido al espacio cívico y, con él, al académico. La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2025, obliga a las organizaciones que reciben financiamiento internacional a registrarse bajo esa categoría, les impone un gravamen del 30% sobre esos fondos y otorga al Ejecutivo la facultad discrecional de sancionarlas o cancelarlas; Amnistía Internacional la ha señalado

como parte de un asedio deliberado a la sociedad civil, diseñado para sembrar incertidumbre y silencio (Amnistía Internacional, 2025).

Los números confirman que ese clima no es una impresión subjetiva. Cristosal encontró que casi nueve de cada diez organizaciones consultadas recurren hoy a la autocensura para protegerse: limitan lo que dicen en público, trabajan puertas adentro, ocultan su identidad incluso en espacios virtuales (Cristosal, 2024). Ese informe habla de sociedad civil, no de universidades; pero sería ingenuo suponer que la comunidad académica, que en Centroamérica rara vez opera con independencia plena de esas mismas dinámicas institucionales, queda al margen. Investigar juventudes, violencias, derechos humanos y pandillas en El Salvador hoy significa hacerlo bajo un régimen que ha convertido la pregunta incómoda en un acto potencialmente riesgoso, incluso cuando su propósito es comprender para prevenir, no justificar para excusar.

Cuerpos, archivos y silencios: los costos metodológicos de investigar bajo sospecha

Este contexto transforma el propio hacer investigativo. Acercarse a fuentes primarias —jóvenes con trayectorias de violencia, familiares de víctimas, comunidades estigmatizadas— se vuelve más difícil cuando hablar con un investigador puede leerse, desde el poder o desde el propio entorno, como un acto sospechoso en sí mismo. La protección de quienes participan deja de ser una cuestión ética abstracta: ¿cómo garantizar el anonimato de un testimonio cuando la sola asociación con ciertos temas puede acarrear consecuencias legales o físicas, tanto para quien narra como para quien escucha? Los protocolos convencionales de consentimiento informado, pensados para riesgos previsibles, no alcanzan cuando el propio Estado puede interpretar la investigación misma como evidencia incriminatoria.

A ese riesgo objetivo se suma uno más difícil de medir: el miedo. En un contexto de detenciones masivas y arbitrarias, jóvenes, familiares y líderes comunitarios temen hablar; temen que sus palabras se malinterpreten, se graben, se usen en su contra. Ese temor se convierte en desconfianza hacia cualquiera que se acerque a preguntar —investigador, periodista, funcionario—, y no se dirige solo al Estado: también al vecino, al conocido, incluso a la propia familia, ante la posibilidad de que un comentario cualquiera sea malinterpretado o denunciado. Reclutar participantes para una entrevista o un grupo focal se vuelve, en ese escenario, una tarea que ningún consentimiento informado puede resolver por sí solo, porque el miedo no responde a garantías formales sino a la experiencia acumulada de vivir bajo sospecha permanente. Es el mismo patrón que documenta Cristosal entre organizaciones sociales salvadoreñas (Cristosal, 2024), y no hay razón para pensar que las juventudes que constituyen la población de estudio de buena parte de esta investigación estén exentas de él. El resultado es un silencio que empobrece el conocimiento disponible no por falta de interés académico, sino porque las condiciones mínimas de confianza que hacen posible el testimonio se han erosionado.

A esa dificultad se suma un problema más básico: no sabemos, con precisión, de quién hablamos. El régimen de excepción salvadoreño ha significado, según monitoreo oficial, más de 91500 detenciones hasta marzo de 2026, cifra a la que organizaciones de sociedad civil suman una población penitenciaria que superaría hoy las 130000 personas (CIDH, 2026). Pero no existe información pública y desagregada sobre cuántas de ellas son jóvenes, ni sobre cuántas son menores de edad: sabemos que al menos 3000 son niños y niñas (Human Rights Watch, 2026), un dato que no permite reconstruir el peso real de la población joven adulta, ni su distribución por sexo, territorio o condición socioeconómica. Algo parecido ocurre con las muertes bajo custodia estatal —entre 470 y más de 500 desde el inicio del régimen, según

distintas organizaciones (Amnistía Internacional, 2026; CIDH, 2026)— sin que exista un desglose oficial por edad. Esa ausencia de datos no es un vacío neutral: es, en sí misma, una forma de cierre. Sin cifras desagregadas es imposible dimensionar el fenómeno o sostener con rigor una investigación sobre su impacto diferenciado en las juventudes; la opacidad estadística funciona como un límite adicional a lo que puede investigarse.

A esto se suma un costo menos visible: la autocensura de quien investiga. No son solo los temas que dejan de estudiarse, sino las preguntas que se formulan con más cautela, los hallazgos que se matizan, las publicaciones que se piensan dos veces antes de nombrar directamente a una institución o a un funcionario. Ese cálculo de riesgo, muchas veces casi inconsciente, termina decidiendo qué preguntas parecen investigables y cuáles se archivan antes de plantearse siquiera. El conocimiento sobre las juventudes centroamericanas se empobrece entonces no porque falten investigadores dispuestos, sino porque el terreno mismo en el que deben moverse ha sido progresivamente minado.

Re-existir la investigación: hacia una postura epistémica y política

Frente a este panorama, la salida no puede ser la renuncia a investigar, ni tampoco la ingenuidad de actuar como si el riesgo no existiera. Se trata, más bien, de asumir una postura: investigar juventudes en Centroamérica hoy es, en sí mismo, un acto de re-existencia. Adolfo Albán Achinte propuso este concepto para nombrar las formas en que comunidades históricamente subalternizadas no solo resisten frente a proyectos hegemónicos, sino que inventan condiciones de vida distintas, encontrando fisuras allí donde el poder pretende clausurar toda posibilidad (Albán Achinte, 2013). Trasladado al campo de la investigación social, re-existir significa sostener la pregunta crítica sin abandonar el rigor, documentar sin exponer innecesariamente, nombrar las causas estructurales de la violencia sin renunciar a la responsabilidad política que esa tarea conlleva.

Esto exige, para las comunidades académicas centroamericanas, al menos cuatro compromisos concretos. Primero, construir redes regionales de investigadores que permitan compartir riesgos, metodologías y hallazgos más allá de las fronteras nacionales, reduciendo la vulnerabilidad de quien investiga en solitario dentro de un solo país. Segundo, disputar activamente el relato oficial sobre las juventudes, no solo con datos, sino con marcos conceptuales propios —como el de juvenicidio— que permitan nombrar con precisión lo que las categorías penales oficiales insisten en simplificar. Tercero, recuperar la dimensión ética y política de la investigación como forma de acompañamiento: investigar no solo para producir conocimiento, sino para sostener, documentar y visibilizar las formas en que las propias juventudes ya están re-existiendo, organizándose y sosteniendo la esperanza en contextos que insisten en negársela. Y cuarto, sostener y multiplicar espacios de formación en estudios de juventud —diplomados, seminarios, líneas de investigación dentro de los posgrados ya existentes— que vayan tejiendo, poco a poco, la institucionalidad académica que hoy falta en la región, acompañados de fondos de investigación específicos y de proyectos regionales capaces de financiar agendas de largo aliento en lugar de estudios puntuales atados a los ciclos de la cooperación. Solo así el campo de los estudios de juventud en Centroamérica podrá dejar de ser un terreno fértil para la sospecha y convertirse en lo que nunca terminó de ser: una comunidad académica propia, sostenida y capaz de acompañar a sus juventudes con conocimiento situado.

Volvamos, entonces, a la pregunta inicial ¿qué significa ser joven en Centroamérica hoy? No hay una respuesta única, pero sí una certeza que atraviesa este texto: mientras existan

juventudes dispuestas a inventarse la vida de otro modo, habrá también la necesidad —y la responsabilidad— de investigarla con rigor, con cuidado y sin miedo a comprender.

Bibliografía

Aguilar Villamariona, Jeannette (2024). Juvenicidio en El Salvador: de la Mano Dura al estado de excepción. Anuario de Estudios Centroamericanos, 50, 1–47. https://doi.org/10.15517/ycet7n42

Albán Achinte, Adolfo (2013). Pedagogías de la re-existencia: Artistas indígenas y afrocolombianos. En Catherine Walsh (Ed.), Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir (Tomo I, pp. 443-468). Ediciones Abya Yala.

Amnistía Internacional (2023). El Salvador: Políticas, prácticas y legislación arbitraria y abusiva amenazan los derechos humanos y a la sociedad civil. Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional (2025). El Salvador profundiza el asedio a la sociedad civil. Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional (2026). El Salvador: El costo humano del régimen de excepción podría constituir crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2026). CIDH continúa monitoreando los efectos del régimen de excepción sobre los derechos humanos en El Salvador [Comunicado de prensa]. Organización de los Estados Americanos.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) (2014). *Invertir para transformar: La juventud como protagonista del desarrollo*. CEPAL.

Cristosal (2024). "Ver, oír y callar": La nueva realidad del espacio cívico en El Salvador. Cristosal.

Duarte Quapper, Claudio (2015). El adultocentrismo como paradigma y sistema de dominio: Análisis de la reproducción de imaginarios en la investigación social chilena sobre lo juvenil [Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona].

El Independiente (2024). Educación superior centroamericana: cara, deficiente y margina a los pobres. El Independiente.

Human Rights Watch (2026). Informe mundial 2026: El Salvador. Human Rights Watch.

Krauskopf, Dina (2003). La construcción de políticas de juventud en Centroamérica. En Óscar Dávila (Ed.), *Políticas públicas de juventud en América Latina: Políticas nacionales*. CIDPA Ediciones.

Mbembe, Achille (2011). *Necropolítica* (E. Falomir Archambault, Trad.). Melusina.

Reguillo Cruz, Rossana (2000). *Emergencia de culturas juveniles: Estrategias del desencanto*. Grupo Editorial Norma.

UNICEF (2018). Desarraigados en Centroamérica y México. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Valenzuela Arce, José Manuel (Coord.) (2015). *Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España*. ITESO / El Colegio de la Frontera Norte.

Ecuador: reconfiguración necro-neoliberal y emergencia de la sociedad juvenicida

René Unda Lara[10]

La mutación del Estado ecuatoriano

El periodo comprendido entre 2017 y 2026 representa uno de los momentos en los que con mayor drasticidad se han plasmado, desde los distintos poderes del Estado, conductas y prácticas antidemocráticas en la historia reciente de Ecuador. Lo que las narrativas anti progresistas y neoliberales, a través de sus medios corporativos simplificaron como un necesario "giro a la derecha" (Paz y Miño, 2021), tras una década de reformas económicas y políticas alineadas con el llamado progresismo, ha conducido a la consolidación de formas autoritarias en la gestión gubernamental y del Estado, en general. La referida consolidación del autoritarismo constituye, a nuestro juicio, la plataforma base sobre la cual se ha transitado hacia la instauración de un modelo necro-neoliberal (Unda Lara, 2022) entendido, en principio, como una modalidad radicalizada del neoliberalismo autoritario. Este fenómeno no se limita a un cambio de signo político en la conducción gubernamental del Estado sino que representa, más bien, una alteración conceptual de la moderna función estatal, en la que el contrato social ha sido suplantado por una gestión deliberada de la muerte como dispositivo de poder.

En esta reconfiguración, el Estado ecuatoriano ha transitado de una lógica neodesarrollista, desplegada entre 2007-2017 con el gobierno de Revolución Ciudadana, hacia una fase de desmantelamiento institucional que ha dado pie a la emergencia de una sociedad juvenicida. Este concepto, que abreva de las tesis de Valenzuela Arce (2016) y Mbembe (2011), alude a una estructura societal que no solo permite el exterminio físico de su juventud precarizada, sino que lo legitima mediante dispositivos simbólicos de estigmatización y aporofobia. La tesis central de este análisis sostiene que el desmantelamiento de lo público, iniciado en 2017 con el gobierno de Lenín Moreno, generó un vacío de presencia estatal pensada en clave de derechos sociales, que fue ocupado deliberadamente por una simbiosis entre determinados ámbitos y actores de la élites económicas y el crimen organizado (Rodríguez, 2024). El decreto de "Estado de Conflicto Armado Interno" en enero de 2024 no debe leerse como una medida excepcional de seguridad, sino como la consolidación de la deriva autocrática que utiliza el terror y la militarización para garantizar un orden social adecuado a los intereses rentistas de las elites oligárquicas criollas.

Del ciclo posneoliberal al necro-neoliberalismo. Hitos del “giro a la derecha"

Para desentrañar la arquitectura de la violencia actual, es imperativo analizar los ciclos políticos no como meras alternancias gubernamentales sino como modelos de producción socio estatal que, aun manteniendo ciertas líneas de continuidad, se presentan como contrapuestos o como la superación del anterior. El periodo 2007-2017, conocido como el ciclo posneoliberal o progresista, se sostuvo sobre una inversión social masiva que duplicó el PIB y situó a Ecuador como el segundo país más seguro de la región, con una tasa de

[10] Sociólogo (PUCE, Ecuador). Dr. Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (U. de Manizales-CINDE, Colombia). Profesor investigador de la Universidad Politécnica Salesiana Ecuador. Coordinador e investigador del grupo de investigación sobre Niñez, Adolescencia y Juventud, CINAJ-UPS. Integrante del Grupo de trabajo Infancias y Juventudes de CLACSO.

homicidio que se redujo de 19,6 homicidios intencionales por cada cien mil habitantes en 2009 a 5,8 en 2017. Este escenario fue posible gracias a la priorización de lo público desde la gestión estatal, en el marco de la reforma institucional del Estado que, desde su inicial despliegue fue cuestionada por las elites económicas y por varios sectores bajo la consigna de concentración de poder en el Ejecutivo, priorizó la integración social a través de una inédita inversión social en los sectores de salud, educación, infraestructura y vialidad, y, evidentemente, en todo el sistema de seguridad pública (MDI, 2020; autor, 2024).

El quiebre producido a partir de 2017, bajo el gobierno de Lenín Moreno, representa el retorno de un recetario neoliberal que fue radicalizándose luego de la revuelta popular de Octubre 2019, con la llegada de la pandemia, con el levantamiento indígena y popular de junio de 2022, con las movilizaciones de septiembre-octubre de 2025 y con la irrefrenable instalación de la fase de consolidación autocrática del gobierno de Noboa. Cada uno de estos momentos representa la concurrencia conflictiva de fuerzas en tensión que disputan, en condiciones de total asimetría, la reafirmación de la conducción política de la sociedad como principal instrumento mediante el cual asegurar la reproducción intensificada del patrón de acumulación, unos, y la defensa de los cada vez más constreñidos espacios democráticos, otros; el embate de las elites oligárquicas frente a las intermitentes resistencias asediadas por los permanentes estados de excepción y la siempre amenazante presencia de los militares. En este escenario, el carácter autoritario del proyecto neoliberal, en complicidad o colusión con el crimen organizado, ha adoptado formas que gubernamentalidad ancladas en la necropolítica, según los planteamientos de A. Mnembe (2011). El formalismo democrático de la primera oleada neoliberal de las dos últimas décadas del siglo pasado ha sido triturado por la voraz aplanadora autoritaria de quienes representan los intereses del capital rentista. Y, para ello, las decisiones sobre quién vive y quién debe morir no son más que asuntos que se resuelven a conveniencia (Herrera, 2025). La emergencia del ciclo necroneoliberal se inscribe en esta dinámica de relaciones.

La transición de las relaciones entre el Estado y las economías ilícitas ha atravesado tres fases críticas, según el modelo explicativo de Lupsha (1996) y retomado por Rodríguez (2024)

1. Fase predatoria (años 80-90)**:** el crimen organizado operaba al margen del Estado, en una relación de confrontación o evasión.
2. Fase parasitaria (2007-2017): las estructuras delictivas intentaban infiltrar fisuras en un Estado fortalecido que mantenía el control territorial y penitenciario.
3. Fase simbiótica (2018-2026): se consolida una colusión directa entre funcionarios de alto rango, élites económicas y Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). En esta etapa, el Estado funciona como una plataforma para el narcotráfico y el lavado de activos, como lo evidencian los vínculos entre la mafia albanesa y las exportaciones de sectores estratégicos.

Hitos del desmantelamiento y la selectividad estratégica

El vacío institucional fue una construcción política intencionada. Bajo la égida de la austeridad fiscal dictada por el FMI, el Estado ecuatoriano ejecutó un recorte sistemático de su capacidad operativa. El presupuesto de la salud pública entre 2021 y 2022 se redujo en USD 643.17 millones. Específicamente, en el periodo 2023-2024, la inversión en salud sufrió una reducción adicional de USD 32.05 millones, limitando la capacidad de atención en infraestructura e insumos básicos.

En cuanto a Educación, la tasa bruta de matrícula en Educación General Básica cayó del 108.27% en 2014 al 93.14% en 2024. Este retroceso ha dejado a entre 250,000 y 450,000 niños y jóvenes fuera del sistema educativo, creando un ejército de reserva para el reclutamiento forzado de los GDO. Y mientras el presupuesto de Educación y Salud sufría recortes, el de Seguridad y Defensa creció exponencialmente, pasando del 1.40% en 2021 al 21.93% en 2024.
Este retiro estratégico de lo público no generó mayor seguridad ciudadana, sino que entregó la soberanía territorial a estructuras mafiosas que proveen el sentido de pertenencia a los jóvenes y los recursos que el Estado ha negado sistemáticamente.

La producción socioestatal de las violencias y la necropolítica
La crisis de seguridad en Ecuador no puede reducirse a un fenómeno de "delincuencia callejera". Es, en rigor, una producción socioestatal de las violencias, donde el aparato institucional produce terror tanto por omisión (abandono de servicios) como por acción (represión militarizada). Aquí cobra vigencia el concepto de necropolítica de Achille Mbembe: el poder soberano ya no se define por garantizar la vida, sino por la facultad de decidir quién debe morir.

En el Ecuador necro-neoliberal, el Estado ha delimitado "necro-zonas": barrios periféricos y cantones de "alta peligrosidad" donde la probabilidad de muerte es estructuralmente mayor. En estos territorios, el Estado "deja morir" al desfinanciar hospitales y "hace morir" al etiquetar a jóvenes precarizados como "objetivos militares". Esta lógica de guerra interna permite la suspensión de derechos bajo una narrativa de combate al terrorismo que oculta la responsabilidad de las élites en la crisis.

Caso de estudio: "Los Cuatro de las Malvinas"
El evento del 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil es la prueba más atroz de esta deriva. Cuatro adolescentes afroecuatorianos (de entre 11 y 16 años) fueron detenidos arbitrariamente por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana tras jugar un partido de fútbol. Fueron torturados y ejecutados extrajudicialmente.
La deliberada criminalización racial y aporofobia mostrada inicialmente por el Ministro de Defensa, Lofredo, quien afirmó que los jóvenes estaban "delinquiendo", fue categóricamente debunked por el juez de la causa al no existir prueba alguna. Hasta la fecha, 17 miembros militares han sido implicados en este crimen. El presidente Noboa, quien inicialmente prometió declarar "héroes nacionales" a los efectivos involucrados antes de conocerse la verdad, ha mantenido un silencio sepulcral, omitiendo condolencias a las familias. Este caso demuestra cómo el "Estado de Conflicto Armado Interno" otorga una licencia tácita para el exterminio de cuerpos racializados, consolidando una subjetividad social desdemocratizadora que legitima la barbarie.

Anatomía de la sociedad juvenicida. Exclusión y exterminio
Ecuador se encuentra ante una paradoja de "suicidio societal". La juventud (14-29 años) representa el 31.5% de la población nacional. Al aniquilar física y simbólicamente a esta generación, el Estado está destruyendo el bono demográfico que debería sostener el sistema de pensiones y la economía hacia el 2050. La sociedad juvenicida es aquella que, ante el miedo inducido, aprueba el sacrificio de sus jóvenes bajo la premisa de la seguridad y

legitima las decisiones del aparato estatal. Y, con ello, sacrifica su sostenibilidad futura (CINAJ-GIPS, 2025)

Análisis de la Letalidad Homicida (2018-2026)

La escalada de violencia no tiene precedentes. Ecuador pasó de registrar 996 homicidios en 2018 a una cifra aterradora en 2025.

Año	Tasa de Homicidios (por 100k hab.)	Homicidios Totales (Absolutos)	Contexto Político-Institucional
2018	5.8	996	Inicio del desmantelamiento (Moreno)
2021	14.16	2,455	Crisis carcelaria y ajuste FMI (Lasso)
2023	44.5	8,008	Auge de GDO y masacres carcelarias
2024	38.8	6,860	Estado de Conflicto Armado Interno
2025	**50.9**	**9,216**	Récord histórico: País más violento de la región
2026 (Proj.)	**55.0**	**--**	Consolidación autocrática (Noboa)

Nota: Los datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO, 2026) confirman que el rango etario de 18 a 34 años concentra la mayoría de las víctimas, con picos alarmantes en sectores de exclusión histórica.

El Juvenicidio en el sistema estatal

El Estado ha configurado una trampa estructural para la juventud en la que puede distinguirse tres grandes problemas:

1. Las cárceles como necro-zonas**:** según el censo penitenciario, el 82.9% de los PPL están en edades productivas, y el 63% de la población carcelaria son jóvenes de 18 a 29 años. Lejos de ser centros de rehabilitación, funcionan como escuelas de criminalidad y espacios de ejecución masiva (Carrión Mena, 2024)
2. Abandono escolar y reclutamiento: con casi setecientos mil niños y adolescentes fuera del sistema educativo (Tobar, 2026) los GDO operan como la única vía de "movilidad social" y "aspiracionismo de clase". Las estructuras mafiosas ofrecen un sentido de "lujo y pertenencia" que el modelo de austeridad ha borrado del horizonte público.
3. Desempleo juvenil**:** la tasa de desempleo en el rango de 15 a 24 años fluctúa entre el 34% y el 38.5%, la más alta de todos los grupos etarios, empujando a la juventud hacia la informalidad o la economía ilícita (OECO, 2026)

Consolidación autocrática y el Estado capturado

La crisis de seguridad ha sido instrumentalizada para justificar una concentración autocrática del poder. Ecuador ha vivido 16 años bajo estados de excepción (sumando los periodos de Correa, Moreno, Lasso y Noboa), pero es en el ciclo actual donde esta medida se ha convertido en una técnica ordinaria de gobierno para eludir el control legislativo y judicial.

La "mano dura" del gobierno de Daniel Noboa es profundamente selectiva. Mientras se militarizan barrios populares, el Estado opera como una plataforma de beneficios para las élites financieras. Una de ellas es la remisión tributaria, mediante la "Ley de Remisión", se exoneraron deudas tributarias millonarias a grandes conglomerados. El Grupo Noboa, por ejemplo, vio su deuda reducida de USD 90 millones a aproximadamente USD 21 millones. Simultáneamente, se incrementó el IVA al 15%, transfiriendo el costo de la "guerra" a las clases medias y populares (Primicias, 2025).

La impunidad frente a la narcopolítica, evidenciada en casos como Metástasis, Purga y Encuentro revelan que el crimen organizado no está solo en las calles, sino incrustado en distintos ámbitos estatales, cercanos al Ejecutivo. Mientras se persigue a jóvenes por delitos menores, contenedores vinculados a empresas bananeras de élite (caso Noboa Trading y la conexión con la mafia albanesa) son hallados con droga sin que existan sanciones reales para sus propietarios.

La “selectividad estratégica” (Jessop, 2018) del necropoder no podría operar sin la presencia del estado de excepción permanente. Solo en el actual mandato, el uso recurrente de decretos ha permitido suspender derechos fundamentales de forma continua, facilitando la captura institucional y el silenciamiento del disenso político.

Gramáticas de la resistencia y contención democrática

Frente a la asfixia del proyecto necro-neoliberal, el tejido social ecuatoriano ha generado, en distintos momentos, modalidades de resistencia que desafían la gestión de la muerte. La resistencia en Ecuador, se encuentra en una estado de intermitencia, debilidad y carente de conducción estratégica, expresa la lucha por la vida y las aspiraciones de recuperación de la dignidad ciudadana.

Un esbozo de la protesta entre 2019-2025, permite ubicar las movilizaciones territoriales los levantamientos indígenas de Octubre 2019 y Junio 2022 marcaron límites claros al ajuste neoliberal, demostrando que el consenso de las élites puede ser quebrado por la acción colectiva.

Por otro lado, se han producido formas de resistencia institucional; la Corte Constitucional, no sin ciertas ambivalencias, se ha erigido como un contrapeso crítico, declarando la inconstitucionalidad de leyes y decretos que vulneraban derechos bajo el pretexto de la seguridad, a pesar de los ataques frontales del Ejecutivo (Unda Lara, 2026).

También en el plano socioinstitucional, el triunfo en las urnas, a propósito de la Consulta Popular de finales de 2025, representó una victoria ciudadana histórica, donde el pueblo rechazó la propuesta gubernamental de ceder soberanía y recursos estratégicos al arbitrio de corporaciones multinacionales y el arbitraje internacional.

Finalmente, las redes de cuidado, conformadas por colectivos de familiares de personas privadas de la libertad, PPL, ollas populares y guardias comunitarias resisten el embate de las políticas neoliberales y disputan la soberanía al Estado y al crimen. Asimismo, las juventudes utilizan el arte urbano y el hip-hop como trincheras semióticas para romper el estigma de "terroristas" y recuperar su humanidad.

Conclusión. La sociedad juvenicida o la paradoja del suicidio societal.

Ecuador atraviesa el momento más crítico de su historia republicana. El tránsito de ser una "isla de paz" al epicentro regional de la violencia no es fruto del azar sino el resultado tangible de decisiones políticas deliberadas que configuran el modelo necro-neoliberal. La sociedad juvenicida es la consecuencia de un Estado que ha abdicado de su responsabilidad de proteger para dedicarse a administrar la muerte en función de la acumulación de capital por despojo.

Al aceptar la militarización de la vida y legitimar el exterminio de jóvenes precarizados, la sociedad ecuatoriana está incurriendo en un suicidio demográfico. Un país que encarcela a su juventud, recorta USD 32 millones en inversión de salud y permite que casi setecientos mil estudiantes abandonen las aulas (Tobar, 2026), está clausurando su propia viabilidad hacia el futuro. La urgencia histórica demanda recuperar lo público, desmilitarizar el conflicto social y desmantelar la simbiosis entre el poder estatal y las economías criminales. Solo así podrá Ecuador frenar su deriva juvenicida y reconstruir un tejido social hoy desgarrado por el miedo, la impunidad de las élites y el exterminio de sus hijos.

Referencias Bibliográficas

Carrión Mena, Fernando (2024), *La producción social de las violencias en Ecuador y América Latina. Histórica, estructural, plural y relacional*. FLACSO Ecuador.

CINAJ-GIPS (2025), *Jóvenes, violencia y cultura de paz*. Informe de investigación.

Herrera Aguilar, Karina (2024), *Doble criminalización en cantones de "alta peligrosidad" en Ecuador: un análisis in situ*. Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

Herrera, Lizardo (2026), *El fármacoimperialismo y su expansión en el Ecuador*. Bellas Letras.

Jessop, Bob (2028), *Estado. Pasado, presente y futuro*. Siglo XXI

Mbembe, Achille (2011), *Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto*. Editorial Melusina.

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) (2026), *Boletín anual de homicidios 2025*. Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

Paz y Miño, Juan (2022), *Cambio de rumbo. Ecuador: Economía y Sociedad, 2017-2021*. Navegando Publicações.

Tobar, Luis (2026), Ecuador: la educación en cifras.

Unda Lara, René (2022), *Paro nacional indígena y movilización social en Ecuador. El trayecto de Octubre 2019 a Junio 2022*.

Unda Lara, René, Llanos Erazo, Daniel; Ajila, Adriana & Contreras, Angie (2025), *Configuración necro-neoliberal y sociedad juvenicida en Ecuador. ¿De las pandillas a los grupos de delincuencia organizada?*

Unda Lara, René; Morochz Coronel, Ivonne, & Chancusig Simaluisa, Zamy (2026), *Ecuador: Sociedad juvenicida y consolidación autocrática en Ecuador. Modalidades de la resistencia en el ciclo necro neoliberal*.

Valenzuela Arce, José Manuel (2015), *Juvenicidio: Ayotzinapa y las estructuras de odio*. El Colegio de la Frontera Norte.

Valenzuela Arce, José Manuel (2018), *Trazos de sangre y fuego: bionecropolítica y juvenicidio en América Latina*. CALAS.

Crisis económica, asfixia imperial e impactos para las infancias y juventudes en Cuba

María Isabel Domínguez [11]

En Cuba las infancias y juventudes han estado en el centro de las políticas sociales a lo largo de décadas, pero la crisis económica que se ha venido produciendo en los últimos años, como resultado del endurecimiento de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos y agudizada por el genocida bloqueo energético desde inicios del año 2026, junto a nuevas medidas para terminar de asfixiar su economía y condenar a todo un pueblo a carencias y necesidades sin precedentes, han generado un crecimiento de la heterogeneidad y las desigualdades con impactos específicos sobre las generaciones jóvenes.

Desde inicios de la actual década, a partir del impacto de las medidas tomadas por la primera Administración Trump para fortalecer el bloqueo económico, comercial y financiero sobre Cuba, la pandemia de la Covid-19 y medidas económicas internas que aumentaron la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos derivados del trabajo, se hizo más evidente el aumento de las desigualdades socioeconómicas que colocaban a comunidades, familias y personas en condiciones sociales de vulnerabilidad con especial afectación para las personas adultas mayores, pero también para las generaciones jóvenes.

En un contexto de ordenamiento institucional y jurídico que siguió a la aprobación de una nueva Constitución de la República en 2019, que favoreció la formulación de nuevas políticas sociales, es que se aprobó en 2023 la Política integral de niñez, adolescencias y juventudes (PINAJ) (ANPP, 2024), la que partió de un amplio consenso sobre la necesidad de contar con un instrumento articulador, que reconociera y abordara las necesidades de niñas, niños y jóvenes, tanto en el sentido de su atención y protección, pero – sobre todo – de su mayor participación.

La formulación de la PINAJ partió de un diagnóstico que tuvo varias fuentes. La primera fue la acumulación de información proveniente de resultados de investigación que fueron dando seguimiento a las fortalezas y debilidades de la socialización infantil y juvenil e identificando los riesgos del contexto para su plena inclusión social (Domínguez, 2022). Ese primer diagnóstico se complementó con la visión de un conjunto de organismos e instituciones que de manera directa o indirecta atienden las dinámicas de inclusión social de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La mirada se completó con una consulta pública a esos grupos en la que identificaron sus principales necesidades y aspiraciones y vertieron criterios de cómo solucionarlos.

El diagnóstico para la elaboración de la Política mostró la persistencia de un conjunto de problemáticas generales en las que centrar la atención tales como: la sectorialidad y desarticulación entre políticas, programas y planes dirigidos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, incluida la inconsistencia en el tratamiento de los rangos de edades de cada uno de ellos; la existencia de segmentos de las infancias y las juventudes en condiciones de vulnerabilidad, incluso de pobreza, derivadas del crecimiento o conservación de desigualdades económicas y sociales; la transformación de valores, aspiraciones y proyectos

[11] Doctora en Ciencias Sociológicas y Postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Investigadora de Mérito del Grupo de Estudios sobre Juventudes del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), La Habana, Cuba. Miembro del Grupo de Trabajo en infancias y juventudes de CLACSO.

de vida; los limitados espacios y mecanismos de participación de que disponían para la formulación, implementación y evaluación de políticas que le conciernen en las distintas esferas sociales y niveles territoriales; la dispersión de la información estadística y el insuficiente aprovechamiento de la existente para dar seguimiento y evaluar de forma sistemática la situación de estos grupos y la efectividad de las políticas que se habían implementado; y la desactualización de muchas de las normativas jurídicas referidas a estos sectores.

Todo ello sin desconocer la dinámica demográfica del país caracterizada por un fuerte envejecimiento y una tendencia sistemática al decrecimiento de las generaciones jóvenes, de manera que para el año 2024 ya el conjunto de personas mayores de 60 años había sobrepasado a los menores de 30 años: 25,7% y 23,4% respectivamente (ONEI, 2025, p.8). Ese proceso ha continuado intensificándose por la contracción de los nacimientos y el significativo aumento de la emigración en esas edades. Esta última ha seguido una dinámica, tanto internamente desde las zonas rurales a las urbanas, como hacia el extranjero, con sus repercusiones en el plano demográfico, laboral, social, político y cultural en general, que favorecen condiciones sociales de vulnerabilidad como son la no continuidad de estudios, desvinculación laboral, surgimiento o ampliación de barrios insalubres, niñas y niños que quedan sin el acompañamiento de sus figuras parentales o familias en las que aumentan los miembros más necesitados de cuidados como los adultos mayores, entre otras consecuencias.

La PINAJ se planteó entonces articular las políticas y normativas nacionales y los compromisos internacionales en materia de infancias y juventudes, con el objetivo general de propiciar su desarrollo integral, el respeto pleno a sus derechos, su protección e inclusión social con equidad y su contribución al desarrollo social y la unidad nacional.

Para el cumplimiento de ese objetivo general se definieron 14 objetivos específicos (ver PINAJ, ANPP, 2024). Si bien uno de ellos se refiere de forma explícita a la identificación, análisis y atención a las condiciones de vulnerabilidad, en cada uno de los restantes fueron concebidas acciones para prevenir riesgos o mitigar sus consecuencias considerando, desde una perspectiva interseccional, el tratamiento diferenciado a los grupos que conforman a las infancias y juventudes según grupo de edad, género, orientación sexual e identidad de género, color de la piel, territorio (con especificaciones para los territorios rurales y de montaña), ocupación (estudiantes por niveles de enseñanza, trabajadores, desvinculados del estudio y el trabajo) y condición de discapacidad.

El objetivo explícitamente dirigido al tema de la vulnerabilidad se planteaba elevar la calidad en la identificación, análisis, atención y seguimiento a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en esa situación, así como a sus familias y los entornos comunitarios donde se desarrollan y potenciar la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias para ejercer sus derechos y obligaciones en el entorno.

Las principales acciones para su cumplimiento se orientaban a ampliar las prestaciones sociales de diversa índole a familias con niñas, niños y adolescentes, en arreglo a sus niveles de vulnerabilidad; atender en el ámbito local las necesidades específicas de las mujeres jóvenes en edad reproductiva y de manera diferenciada a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran; incrementar la vinculación con los proyectos comunitarios y ofertas culturales, deportivas y recreativas en territorios rurales, montañosos y comunidades en condiciones de vulnerabilidad social; y mejorar la infraestructura, la base material de estudio y de vida de las instituciones educativas, deportivas y culturales ubicadas en esas comunidades.

Particular atención planteaba la PINAJ a la salud a lo largo del ciclo de vida de esas edades, con el aumento de consultas infanto-juveniles, y la atención especializada a la salud sexual y reproductiva y la salud mental, encaminadas a atender el embarazo en la adolescencia, la utilización de sustancias adictivas y la conducta suicida.

Pero la vulnerabilidad y las desigualdades no se revierten con la formulación de políticas públicas. Su implementación depende de un sinnúmero de factores, entre ellos, con mucho peso, la disponibilidad de recursos materiales y financieros que permitan llevar adelante las acciones propuestas. Y precisamente, la crisis económica del país se ha acelerado como resultado del incremento de las acciones agresivas del gobierno de los Estados Unidos, que han generado intensos apagones y falta de agua potable, con afectaciones para hospitales, escuelas, producción de alimentos, transporte, y un aumento de la inflación, todo lo cual está provocando un importante deterioro en las condiciones de vida de las familias con notorias repercusiones sobre las infancias y juventudes.

Por solo citar algunos datos que ejemplifican los impactos en la salud de las infancias mencionaré que la mortalidad infantil aumentó entre 2018 y 2025 de 4,0 a 9,9 por mil nacidos vivos lo que equivale a 1 780 muertes evitables de recién nacidos; la supervivencia por cáncer infantil cayó del 85% al 65% por falta de medicamentos, equipos y tratamientos especializados y hay más de 12 000 niñas y niños esperando cirugías por falta de electricidad (Rodríguez, 2026).

Entre los indicadores relevantes que impactan a las juventudes no se puede dejar de mencionar la migración hacia el exterior que ha reducido la población del país de 11 089 511 de habitantes en 2022 (ONEI, 2022, p.89) a 9 436 440 al inicio de 2026 (Maturell, 2026). La tasa de migración externa se movió de -1,5 en 2019 a -25,4 en 2024 (ONEI, 2025, p.42) (estos son los datos oficiales más reciente, aunque en el último período ha continuado creciendo). Según investigaciones del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, al cierre de 2024, el 50% de las personas que se movieron fuera del país eran niñas, niños y jóvenes menores de 35 años (Maturell, 2026).

La situación de crisis ha estado reconfigurando las posibilidades de inclusión social real con que cuentan las juventudes, en elementos centrales como el papel de la educación, el acceso al empleo y a un salario digno, las posibilidades de emancipación de la familia de origen, así como una participación generacional efectiva, cuestiones que están en la base para conformar un proyecto de vida propio y satisfacer sus necesidades e intereses. Se debe tener en cuenta que el crecimiento de la heterogeneización social no es solo en el plano estructural, sino que se acompaña de reconfiguraciones en el plano subjetivo, con la transformación de universos simbólicos que propician un cambio de valores, aspiraciones y proyectos de vida.

Todo ello coloca al Estado ante un sinnúmero de demandas que obligan a reconsiderar líneas claves para articular enfoques y políticas que garanticen mayor integración social a las juventudes y favorezcan sus roles como actores claves del desarrollo económico y social. Aunque, el contexto actual, marcado por la agresión imperial a Cuba y el impacto transnacional de las narrativas de derecha y ultraderecha no solo en el ámbito económico o político, sino también en el ámbito cultural y subjetivo, muy especialmente en las juventudes, favorecido además por el papel de las redes sociales, inciden en las maneras en que debe gestionarse la cuestión juvenil e impone nuevos retos a la investigación social y a la formulación e implementación de políticas de juventudes.

Referencias

Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) (2024). Política integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes. https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2024-02/politica-integral-de-ninez-adolescencias-y-juventudes.pdf

Domínguez García, María Isabel (2022). "El desafío generacional para la sociedad cubana actual", (documento de trabajo). La Habana: Academia de Ciencias de Cuba.

Maturell Senón, Carmen (2026). "Cuba ante el espejo demográfico de 2026". Periódico Granma, 11 de julio https://www.granma.cu/cuba/2026-07-11/cuba-ante-el-espejo-demografico-de-2026-11-07-2026-10-07-14

Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) (2023). Anuario Estadístico de Cuba 2022. https://www.onei.gob.cu/sites/default/files/publicaciones/2024-04/aec-2022.pdf

_____ (2025). Anuario Estadístico de Cuba 2024. Capítulo 3: Población, La Habana https://www.onei.gob.cu/sites/default/files/publicaciones/2025-07/03-poblacion_aec2024_0.pdf

Rodríguez Parrilla, Bruno (2026). "El bloqueo asfixia y mata de manera silenciosa". Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla en Debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el punto 38, "Necesidad de poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba". Cubadebate, 7 de julio http://www.cubadebate.cu/opinion/2026/07/07/el-bloqueo-asfixia-y-mata-de-manera-silenciosa/

Infancias, juventudes y desigualdades en América Latina y el Caribe: desafíos contemporáneos del trabajo agrario juvenil en Chile y Uruguay

Juan Romero[12]

En América Latina y el Caribe en los últimos veinte años se produjo un fuerte crecimiento económico con desigualdades entre los diferentes países y al interior de estos. Es decir que la mejora de los indicadores sociales no fue igualmente beneficiosa para todos los Estados y grupos sociales. En muchos aspectos, América Latina y el Caribe sigue mostrando desigualdades sociales que no tienen que ver exclusivamente con los niveles de ingreso y que afectan a poblaciones en condiciones particularmente críticas, destacándose la situación de las mujeres –que mejoran sus niveles de vida, pero en menor medida que los varones–, los jóvenes –que lo hacen menos que los adultos– y los diversos grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes o negros, en particular) que, aunque tienen mejores condiciones relativas que antes, muestran indicadores considerablemente más bajos que los de la población blanca y mestiza (Vommaro, 2017).

En un contexto en el cual entre las consecuencias de la pandemia de Covid 19 y de las políticas socieconómicas regresivas de gobiernos conservadores de corte neoliberal, se han profundizado las desigualdades sociales con énfasis en las nuevas generaciones. Ahora, una constante de Latinoamérica y el Caribe con relación a otras regiones, es la persistencia de las desigualdades multidimensionales.

Los estudios relevados siguen mostrando un conjunto complejo y preocupante de paradojas y contrastes, junto con un profundo malestar social, evidente en las irrupciones de movimientos juveniles que hasta no hace mucho tiempo permanecían poco visibles en el espacio público y que en los últimos 10 años han ocupado calles y plazas en lucha por diversos temas, no siempre considerados específicamente juveniles (PNUD, 2010; CEPAL, 2014; Vommaro, P. 2016 y Valdivieso, M. 2016).

En un subcontinente en el cual viven más de 146 millones de personas de entre 15 y 29 años, lo cual representa al 26,3% de su población (OIJ, CEPAL y UNFPA, 2009), se configura así una coyuntura en la cual, a pesar de la baja de los índices de pobreza y de los avances en otros indicadores, las desigualdades sociales persisten y se enfatizan en las y los jóvenes del continente. Esta realidad debería ser un motivo de urgente preocupación y trabajo desde la academia y las políticas públicas, en vinculación con las organizaciones sociales que trabajan para revertirlas.

Jóvenes asalariados agrarios: (in)visibles a la lupa de la desigualdad.

El empleo de la juventud en el sector agropecuario de América Latina y el Caribe (ALC) ha experimentado una transformación estructural profunda entre 2010 y 2024. Los datos de organismos internacionales como la CEPAL, la OIT y la FAO reflejan una clara tendencia de contracción en la participación juvenil directa en el campo, acompañada por persistentes desafíos de informalidad.

En la región habitan cerca de 31 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años en zonas rurales. De esta población, se estima que aproximadamente 9,6 millones trabajan de manera directa

[12] Uruguayo. Sociólogo. Doctor y Maestría en Sociología, profesor agregado e investigador a tiempo completo en la Universidad de la República´- CENUR LN - DCS. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores - ANII, Nivel I. Integrante del GT Infancias y juventudes de CLACSO.

en el sector agrícola, es decir, aproximadamente un 31%, ahora de la PEA agraria del continente representa aproximadamente el 19,6%, de un total de 49 millones de trabajadores dedicados de forma directa a las actividades agropecuarias[13].

Si se amplía la mirada desde la producción primaria hacia los sistemas agroalimentarios en su totalidad (incluyendo procesamiento, logística y comercialización), el sector sigue siendo el principal motor de inserción laboral para la juventud: casi el 39% de los jóvenes ocupados Latinoamérica y el Caribe se desempeñan en alguna etapa de esta cadena. Ahora, el peso de la agricultura como empleador directo de mano de obra juvenil viene en retroceso frente al sector servicios en los últimos 15 años. Estimaciones recientes de la CEPAL proyectan que para el año 2030 la participación de los jóvenes en la agricultura se reducirá a un 8,2% del total de la juventud ocupada, consolidando el desplazamiento histórico que se aceleró en la última década.

Uno de los posibles factores de este descenso, sería el tránsito hacia modelos de producción más precisos y tecnificados (Agricultura 4.0) lo que ha reducido los tiempos muertos y modificado los requerimientos de mano de obra. Ante la falta de acceso a la tierra, el crédito y la asistencia técnica adaptada, muchos jóvenes rurales optan por migrar o cambiar de forma precaria hacia el sector servicios urbano antes que permanecer en las actividades tradicionales del campo.

Se puede considerar otros factores como ser el impacto pos Covid 19, mientras el empleo agrícola general de adultos cayó un 4%, el empleo de los jóvenes en sistemas agroalimentarios se contrajo un 11%, debido a su inserción en los puestos más desprotegidos y con menor estabilidad contractual. Como también la brecha entre calidad del empleo y relevo generacional para la producción agropecuaria, estudios de la FAO indican que, aunque el empleo asalariado formal creció en ciertos nichos agroexportadores dinámicos modernos, las condiciones generales para la juventud rural siguen estando rezagadas respecto a sus contrapartes urbanas. Los bajos salarios, las jornadas extensas y el limitado acceso al crédito o a la propiedad de la tierra actúan como desincentivos, impulsando saldos migratorios y un progresivo envejecimiento de la PEA agrícola regional.

Finalmente, el desafío de la informalidad laboral, tanto estudios de FAO como de la OIT evidencian que más del 80% del empleo agrícola en la región es informal, careciendo de contratos estables, ingresos dignos y cobertura de seguridad social. Las tasas de informalidad y precarización son notablemente más agudas entre las mujeres jóvenes y las comunidades indígenas o afrodescendientes.[14]

Entonces, se está en presencia de un proceso social y productivo heterogéneo en donde la participación juvenil en el mercado laboral agropecuario varía de forma importante según la estructura productiva de cada subregión:

a) **Baja densidad agrícola juvenil (6% al 9%):** Países del **Cono Sur (Chile, Brasil)** y Perú han mostrado los niveles más bajos de empleo juvenil agrícola directo, debido a una mayor diversificación económica y procesos avanzados de mecanización.

---

[13] Ver en: https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/YW2%20Factsheet-eng-final.pdf#:~:text=Nearly%2031%20million%20young%20people%20aged%20between,as%20that%20of%20people%20over%2030%20years.

[14] Ver en: https://www.ilo.org/es/resource/noticias/oit-y-fao-advierten-el-empleo-agropecuario-en-america-latina-sigue-siendo#:~:text=OIT%20y%20FAO%20advierten%3A%20el%20empleo%20agropecuario,Contenido%20tambi%C3%A9n%20disponible%20en%3A%20English%20fran%C3%A7ais%20Portugu%C3%AAs.

b) **Densidad moderada (10% al 15%):** Países como Colombia y Costa Rica sostienen una participación intermedia.
c) **Alta dependencia agrícola (20% al 30%):** En economías de Centroamérica, como **Guatemala y El Salvador**, el sector agropecuario sigue reteniendo a casi un tercio de la juventud trabajadora, reflejando estructuras más tradicionales y familiares de producción. [15]

Teniendo presente lo anteriormente mencionado, a continuación, se presentarán datos acerca de las condiciones sociolaborales, de los asalariados agropecuarios en general pero también entre generaciones de Chile y Uruguay.

Estudio de caso: Chile y Uruguay.

Considerando las transformaciones productivas y sociales en la forma de producir y comercializar alimentos a escala global en la pasada década, pero también permanencias, en países agroexportadores de alimentos como lo son Chile y Uruguay, se pretende analizar las condiciones sociolaborales de los/as trabajadores asalariados/as agropecuarios en la ruralidad uruguaya y chilena. Por otro lado, se procura analizar el proceso en desarrollo de la agricultura de precisión y lo que implica en las condiciones sociolaborales de los asalariados agrarios en dos países pequeños en relación con Brasil, México, Argentina y Colombia como Chile y Uruguay, en definitiva, el comportamiento del mencionado proceso en diferentes contextos, pero de escalas menores.

Tabla 1 – Características de los asalariados agrarios según generaciones – Uruguay 2012 - 2018 – Chile 2010 – 2018.

Estadísticos utilizados.	**Chile 2010**	Chile 2018	**Chile 2010**	Chile 2018	**Uruguay 2012**	Uruguay 2018	**Uruguay 2012**	Uru 201
	Jóvenes	Jóvenes	**Adultos**	Adultos	**Jóvenes**	Jóvenes	**Adultos**	Adu
Horas trabajo semanal (media)	44,52	43,83	45,38	44,34	40,37	41,60	40,19	43,6
Formalidad/informalidad (moda)	60,4% formal	69,7% formal	71,7% formal	75.3% formal	65,3% formal	64,0% formal.	80,5% formal	77,1 forn
Ingreso por hora (media)	USD 7,83[16] (CASEN)	USD 9,43 (CASEN)	USD 8,78 (CASEN)	USD 10,11 (CASEN)	USD 13,77	USD 14.85[17]	USD 18,87	USI 18,9
Pobreza por ingresos (moda)	6,5% (CASEN)	14,3% (CASEN)	8,6% (CASEN)	6,3% (CASEN)	7,2% pobres	3,3% pobres	4,2% pobres	2,4% pob
Tamaño de la empresa (moda)	35,4% entre 11 y 49 empleados.	31,6% entre 11 y 49 empleados.	32,8% entre 11 y 49 empleados.	31,7% entre 11 y 49 empleados.	62,0% entre 1 y 10 empleados	75,0% entre 1 y 10 empleados	52,3% entre 1 y 10 empleados	74,2 entr 10 emp s

[15] Ver en: https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/YW2%20Factsheet-eng-final.pdf#:~:text=How%20they%20are%20spread%20in%20the%20various,and%2030%20percent%20of%20the%20working%20population.

[16] Fuente: Banco Central de Chile, cotización promedio en 2009 USD 1 = $ 560 y en 2017 USD 1 = $ 651. Se menciona 2009 y 2017 porque son los años de relevamiento del dato que se publican el año siguiente.

[17] Fuente: Banco Central del Uruguay, cotización promedio en 2018 USD 1 = $U 31,5 y en 2012 USD 1 = $U 20.

Tamaño Muestra:	5046	9851	12735	20405	1001	781	2336	160

Fuente: ECH – INE 2012 y 2018, elaboración propia y ENE 2010 y 2018– INE Chile elaboración propia.

En el caso chileno lo que respecta a ingreso por hora y pobreza por ingresos, se considera la información proveniente de la Encuesta CASEN[18] 2010 y 2012 con el objetivo no de comparar dado que son diseños muestrales diferentes, pero para tener una idea del comportamiento de dichas variables. Para el 2010 el ingreso por hora para jóvenes fue de USD 7,83[19] y 6,5% de pobreza por ingresos, en cambio para 2018 la hora de trabajo se pagó USD 9,43 un aumento del 20,0% y la pobreza aumento a 14,3% de los/as jóvenes asalariados/as. En tanto entre los adultos, el ingreso por hora fue en 2010 de USD 8,78 y en 2018 USD 10,11 un incremento del 15%, por otro lado, la pobreza entre los/as asalariados/as adultos en 2010 era del 8,6% y en 2018 del 6,3% una disminución importante.

El resto de las variables que forman parte de la ENE se aprecia una leve reducción del 2% en las horas de trabajo semanal para ambas generaciones, aumento de la formalidad en general y finalmente ambas generaciones de asalariados/as trabajando en empresas entre 11 y 49 empleados mayoritariamente.

En Uruguay se registra una dinámica diferenciada de la chilena. Entre los asalariados jóvenes y adultos, se observa una tendencia al aumento de la jornada laboral semanal, particularmente marcada en el grupo adulto, en un contexto de reducción de la formalidad. Si bien la remuneración por hora aumenta en ambos grupos generacionales, el incremento es mayor entre los jóvenes. Por último, el tamaño de la empresa donde se desempeñan se mantiene estable, concentrándose en unidades de menos de 10 empleados.

A modo de síntesis, se registra en Chile una trayectoria de mayor formalización y crecimiento de los ingresos, aunque acompañada de un preocupante aumento de la pobreza juvenil. Mientras que, en Uruguay, un estancamiento de los ingresos para los adultos, pero contrasta con una reducción drástica de la pobreza en todos los grupos generacionales.

En ambos países, los trabajadores adultos registran mayores niveles de formalidad e ingresos. No obstante, en Uruguay su jornada laboral es más extensa. Finalmente, se distingue una divergencia estructural en el tejido empresarial: Chile presenta una distribución más equilibrada, con un peso significativo de las medianas empresas, mientras que en Uruguay prevalece una alta concentración en microempresas.

En conclusión, durante los períodos analizados (Chile 2010-2018; Uruguay 2012-2018), se identifican dos modelos distintos:

1. Chile: Avanza en indicadores clásicos de calidad laboral (ingresos y formalización), pero sufre una precarización juvenil reflejada en el aumento de la pobreza en este segmento.
2. Uruguay: Evidencia una clara recuperación postcrisis (de 2002), con una drástica reducción de la pobreza general, lograda en un marco de estancamiento salarial para los adultos y un aumento de su carga horaria.

Ante lo expuesto se procuró profundizar en la medida de lo posible, por medio de una prueba chi cuadrado para conocer si existiera relación entre formalidad, grupos etarios y países. Los resultados son los que siguen a continuación. El análisis de grupo etario y formalidad indica

[18] Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).

[19] El promedio de ingresos para jóvenes asalariados en 2010 según CASEN, sobre el promedio de horas trabajadas, transformado a USD de acuerdo con el promedio del dólar estadunidense 2010.

una asociación significativa (χ^2=373.5 $p < 0.05$), señalando que los adultos tienen mayor formalidad que los jóvenes. Mientras que entre país y formalidad se aprecia una asociación significativa (χ^2=25,21, p<0.05), en la cual Chile tiene mayor formalidad que Uruguay en estos datos.
En definitiva, los/as jóvenes presentan mayor informalidad laboral en el período analizado en ambos países y Chile presenta mayor formalidad.

Comentarios finales

Al considerar en el análisis países que han intensificado su producción agropecuaria, que cada vez reducen la cantidad de fuerza de trabajo en el proceso productivo y en dicha reducción se encuentran la fuerza de trabajo juvenil, pero que el mismo no es homogéneo se advierte brechas generacionales los jóvenes asalariados se insertan predominantemente en empleos flexibles y estacionales, con menores salarios por hora. Esta dinámica los convierte en un factor de ajuste competitivo para las empresas agropecuarias, permitiéndoles adaptarse a las demandas del mercado global (Bernstein, 2016). No obstante, paradójicamente, este grupo presenta las tasas más altas de pobreza por ingresos.
Por otra parte, acerca de las condiciones laborales a pesar de las diferencias en sus modelos de desarrollo agropecuario entre Chile y Uruguay, se observa precarización y flexibilización laboral, el avance del modelo capitalista en el agro se refleja en el crecimiento del trabajo asalariado, donde el jornal emerge como una modalidad flexible y estacional. Esta forma de contratación permite a las empresas de la cadena de valor optimizar costos durante períodos productivos intensivos, sosteniendo así su competitividad internacional.
Finalmente, asimetrías en la retribución laboral, es decir, los jóvenes, pese a ser funcionales al sistema productivo (al reducir costos y aumentar eficiencia), enfrentan una precarización creciente de sus condiciones de vida. Incluso dentro del trabajo jornalero, se identifica una distribución desigual de las remuneraciones en relación con el esfuerzo exigido, lo que acentúa una apropiación generacional diferenciada del excedente.
En tal proceso el análisis indaga en los territorios rurales (cada vez más interconectados con los urbanos, reconstruyendo fronteras espaciales) la compleja relación entre la precariedad laboral, la desigualdad social y la emergencia de opiniones populistas de derecha. Este proceso se enmarca en una serie de transformaciones productivas, específicamente el denominado paradigma de la precisión productiva, el cual establece como uno de sus objetivos aumentar la productividad, reducir el tiempo de trabajo y acortar los ciclos de producción mediante el uso de tecnologías avanzadas y datos detallados para tomar decisiones más informadas, lo que se conoce como Agricultura 4.0 y 5.0 (Rame, Purwanto y Sudarno, 2024). A lo largo de los últimos 40 años, se ha construido una «fábrica global de alimentos» que demanda menos trabajadores en comparación con décadas anteriores, aunque esto no significa que sean innecesarios.
Considerando lo anterior, para los/as jóvenes asalariados rurales trabajar en dicho proceso productivo ha significado trabajar menos horas semanales, pero de forma intensa en cortos períodos, precarizar dichas condiciones laborales y de vida social, pero, por otro lado, son jóvenes en promedio con más estudios formales que generaciones anteriores de asalariados agrarios, menos pobres y trabajando en medianas y pequeñas empresas agropecuarias. Ahora, en estas condiciones laborales y de vida se observa un aumento en la insatisfacción con la vida, la experimentación de la desigualdad de primera mano y el crecimiento de las expectativas de cambio a través de medios no democráticos. Además, persiste la percepción de que las sociedades son injustas en términos de distribución del ingreso.

Como teorizó Merton (1938), este comportamiento anómico en relación con la prosperidad material dentro de un contexto de desigualdad social persistente crea condiciones de susceptibilidad latente hacia movimientos antisistema (Mudde, 2019).

Este contexto laboral ha catalizado los siguientes fenómenos interrelacionados entre la juventud: (a) una manifiesta insatisfacción con las condiciones de vida; (b) la experiencia vivida de la desigualdad; (c) una creciente apertura hacia alternativas no democráticas para el cambio sistémico; y (d) una compensación asimétrica en relación con el esfuerzo laboral, lo que resulta en una apropiación diferencial generacional.

Basándose en las contribuciones teóricas de Merton (1938) sobre la anomia —que revela brechas de aspiración anómica—, se observa un estancamiento de los salarios agrícolas (+1.2% anual) frente a un crecimiento de las expectativas de consumo (+6.8%). Por otro lado, en cuanto a la alienación institucional, los jóvenes rurales muestran puntuaciones de eficacia política un 40% inferiores a las de sus pares urbanos (Latinobarómetro, 2018).

Por último, ante tales evidencias sugieren algunos riesgos emergentes: (a) susceptibilidad específica del ámbito rural hacia movimientos antisistema (Mudde, 2019); (b) brechas de percepción entre lo urbano y lo rural que pueden exacerbar la polarización territorial; y (c) puntos ciegos conceptuales y metodológicos en los indicadores convencionales de bienestar, revelando limitaciones estructurales en su capacidad para captar las experiencias vividas de desigualdad, particularmente en contextos rurales.

Referencias

Bernstein, Henry (2016). *Dinámicas de clases y transformación agraria*. Editorial Icaria, ISBN 9788498887341, España.

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). (2014). *Panorama social de América Latina 2014*, Santiago de Chile.

Corporación Latinobarómetro. (2018). Estudio Latinobarómetro 2018: Oleada 2018 - Versión agregada. **https://www.latinobarometro.org/latinobarometro-2018**

Davis, Mike (2006). *Planeta favela*. São Paulo: Boitempo.

Mudde, Cas (2019). *The Far Right Today*. Cambridge: Polity Press.

OIJ, CEPAL y UNFPA (2009). *Juventud indígena y afrodescendiente en América Latina: inequidades sociodemográficas y desafíos de políticas*. Madrid: Organización Iberoamericana de Juventud.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2010). *Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009 – 2010. Innovar para incluir: jóvenes y desarrollo humano,* Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Rame, R., Purwanto, P. S., & Sudarno, S. (2024). 5.0 and sustainability: An overview of emerging trends and challenges for a green future. *Innovation and Green Development*, 3(4), 100173, ISSN 2949-7531. https://doi.org/10.1016/j.igd.2024.100173.

Valdivieso, Magdalena (Coord.) (2016). *Movimientos de mujeres y lucha feminista en América Latina y el Caribe.* Colección Becas de Investigación. ISBN 978-987-722-191-6. CLACSO. Buenos Aires.

Vommaro, Pablo (2016). *Juventudes y políticas en la Argentina y en América Latina: Tendencias, conflictos y desafíos,* Colección Grupos de Trabajo. ISBN 978-987-1309-16-0. Grupo Editor Universitario. CLACSO. Buenos Aires.

Vommaro, Pablo (2017). "Hacia los enfoques generacionales e intergeneracionales: tensiones y perspectivas en las políticas públicas de juventud en América Latina" en *Revista Latinoamericana de Estudios de Familia* (Manizales: U. de Caldas).

Sembrar paz desde y con la primera infancia: aportes del pensamiento de María Camila Ospina-Alvarado[20]

Jhoana Patiño López[21] y Sara Victoria Alvarado Salgado[22]

En tiempos en los que las derechas avanzan en el mundo de la mano de viejos y renovados poderes coloniales, la democracia, los derechos humanos y la paz vuelven a estar en peligro, especialmente para quienes se enfrentan de formas más directas a la pobreza, la desigualdad, la precariedad, la explotación y la desesperanza. Un asedio que se encarna en los cuerpos y en los territorios de quienes menos poder tienen, y de manera particular en las niñas, los niños y las y los jóvenes de América Latina y el Caribe, que crecen entre guerras, despojos, fronteras militarizadas y discursos que niegan su condición de sujetos de derechos. Frente a este escenario, el trabajo investigativo del Grupo de Trabajo CLACSO Infancias y juventudes resulta más pertinente que nunca, porque insiste en producir conocimiento situado, creativo y comprometido con la vida; un conocimiento capaz de disputar los sentidos de la infancia, la juventud y la paz que las derechas pretenden clausurar.

Este ensayo se inscribe en esa apuesta colectiva y quiere ser, además, un acto de reconocimiento y de gratitud que recoge de forma reflexiva y pedagógica los principales aportes del pensamiento de María Camila Ospina-Alvarado al campo de la construcción de paz, con la primera infancia, en tiempos de exterminio. Su trabajo, tejido durante más de 12 años en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (CINDE–Universidad de Manizales), nos enseñó que incluso donde la guerra niega la vida, las niñas y los niños siguen creando mundo. Escribimos desde el afecto y desde el trabajo compartido con ella como sus colegas, con la esperanza de que sus ideas sigan caminando en las aulas, en las escuelas, en las comunidades y otros espacios de nuestros territorios.

---

[20] **María Camila Ospina Alvarado** Coordinadora del GT Infancias y Juventudes de CLACSO durante cerca de seis años, promovió una producción de conocimiento crítica, sensible y comprometida con la participación, la dignidad y la transformación de las realidades de niñas, niños y jóvenes. Una destacada psicóloga de la Universidad de Los Andes, Magister en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Javeriana, Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el CINDE, Doctora en Estudios de Medios y Comunicación por el Taos Institute y la Universidad Libre de Bruselas, con una estancia postdoctoral de la RedINJU, fue una investigadora y docente colombiana, cuya trayectoria académica, ética y humana dejó una huella única en las ciencias sociales, los estudios sobre niñez y juventud y el desarrollo humano en Colombia y América Latina. Orientó su pensamiento y su práctica desde el construccionismo social y los enfoques emancipadores. Fue directora nacional del campo de Investigación y desarrollo del CINDE, y Líder del Grupo de Investigación en Perspectivas políticas, éticas y morales y de la Línea de Investigación en Socialización Política, Agenciamientos y Subjetividades del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el CINDE. En memoria de nuestra querida hija, compañera, colega y maestra.

[21] **Jhoana Patiño López** es profesora–investigadora del CINDE, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, con estancia posdoctoral en la Universidad de Caldas. Coordinadora Académica del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (CINDE-Universidad de Manizales).

[22] **Sara Victoria Alvarado Salgado es** directora del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (CINDE–Universidad de Manizales) y de su Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Doctora en Educación, con estancia posdoctoral en la Universidad Católica de São Paulo en el tema de infancias y juventudes. Investigadora del Grupo de Trabajo CLACSO Infancias y juventudes de CLACSO.

¿Por qué hablar de paz con niñas y niños pequeños?

Durante mucho tiempo se pensó que la paz era un asunto de personas adultas. Se creía que niñas y niños debían esperar a crecer para opinar, participar y transformar sus realidades, y que mientras tanto su lugar era aprender las normas que los mayores les transmitían. En América Latina, una región marcada por dictaduras, desigualdades profundas y conflictos armados prolongados, esa manera de pensar dejó por fuera una pregunta urgente. ¿Qué pasa con las niñas y los niños que crecen en medio de la guerra? ¿Son apenas víctimas que hay que proteger, o también sujetos capaces de imaginar y construir mundos distintos?

María Camila, Cami, como todos le decíamos desde el afecto y la cercaria que siempre nos regaló, respondió a esa pregunta con una convicción que hoy constituye un legado para el campo latinoamericano de la niñez. Las niñas y los niños, desde la primera infancia, son sujetos políticos del presente. No son ciudadanos del futuro. En sus juegos, sus relatos, sus maneras de cuidar y de ponerse de acuerdo con otros, producen sentidos sobre la vida en común y participan, desde ya, en la construcción cotidiana de la paz en sus familias, centros de desarrollo infantil barrios y veredas.

Mirar a las niñas y los niños como sujetos políticos del presente

Uno de los puntos de partida más importantes en su obra es una crítica al adultocentrismo. Esa costumbre tan arraigada de mirar la niñez como una etapa de preparación para la vida adulta, un tiempo supuestamente "pre-político" en el que niñas y niños serían receptores pasivos de valores y normas. Bajo esa mirada, la agencia política se reserva para quienes alcanzan la madurez racional, mientras las prácticas políticas que brotan en la vida cotidiana infantil se vuelven invisibles.

Su trabajo desplazó, a lo largo de las investigaciones que realizó en la última década, esa mirada. Y en esas investigaciones realizadas en territorios atravesados por el conflicto armado colombiano, mostró que la experiencia política de niñas y niños no se reduce al aprendizaje de símbolos patrios o de estructuras formales del Estado. Esa experiencia se configura en medio de desplazamientos, violencias y rupturas comunitarias, pero también, en prácticas de solidaridad, cuidado y reconstrucción de vínculos. Allí, en lo cotidiano, niñas y niños producen acuerdos, resignifican experiencias dolorosas y ensayan formas de convivencia.

Este desplazamiento trae consigo una decisión ética que nos sigue interpelando. Frente a la tendencia a mirar a la niñez afectada por la guerra únicamente como víctima, ella propuso reconocer sus potenciales. Reconocer capacidades no significa negar la violencia ni el daño. Significa ampliar el marco de comprensión para que la identidad de niñas y niños no quede fijada en la categoría de víctima, y para que la investigación y la intervención social no reproduzcan, sin quererlo, nuevas formas de revictimización. En trabajos colectivos como el artículo *Futuros posibles*, escrito con el investigador David Arturo Ospina, esta apuesta toma cuerpo en la categoría de potencial creativo, entendida como recurso relacional que permite a niñas y niños imaginar alternativas y transformar experiencias de violencia.

La paz se construye en las relaciones

¿De dónde viene esta manera de mirar? Cami se formó en la perspectiva del construccionismo social, desarrollada por el psicólogo Kenneth Gergen. Esta perspectiva cuestiona la idea moderna de un sujeto encerrado en sí mismo, racional y anterior a toda relación, y propone que el conocimiento, la identidad y los significados se producen en los

vínculos. Las palabras adquieren sentido en el contexto de las relaciones que las sostienen, y el yo se comprende mejor como un nudo en redes de coordinación social que como una esencia interior.

Ella recogió este giro y lo hizo florecer en el campo de las infancias y juventudes latinoamericanas. Desde su trabajo, la subjetividad política dejó de entenderse como una interioridad previa y pasó a comprenderse como una construcción relacional, histórica y situada, que se configura en prácticas discursivas, afectivas y éticas compartidas. La socialización política, a su vez, dejó de ser vista como transmisión unidireccional de normas de los adultos hacia los niños, y se comprendió como un proceso dialógico en el que niñas, niños y jóvenes producen sentidos, disputan significados y configuran posicionamientos propios.

Esta idea tiene una consecuencia enorme para pensar la paz en territorios como los colombianos, pero también en otras latidudes. Si lo político se produce en las relaciones cotidianas, entonces la paz no es únicamente un arreglo institucional que se firma en una mesa de negociación. La paz se construye, o se destruye, en la manera como nos relacionamos cada día en la familia, en la escuela, en el barrio. Por eso su obra prestó tanta atención a las familias, comprendidas no como estructuras normativas cerradas sino como sistemas interaccionales en permanente construcción, donde niñas y niños configuran sus primeras disposiciones frente al poder, la autoridad y el reconocimiento.

Narrar para transformar

Uno de los legados metodológicos más originales de María Camila es el trabajo con narrativas colectivas y generativas. La palabra "generativa" es clave. Estas narrativas no se conforman con registrar lo vivido ni con documentar el trauma. Buscan abrir horizontes. Como lo planteó junto a sus colegas, las narrativas colectivas describen experiencias y, al mismo tiempo, abren caminos de acción y agencia.

En su investigación doctoral *Salir adelante*, realizada con familias en situación de destierro, esta apuesta se concreta de forma más clara y conmovedora. La expresión "salir adelante", tan común en el habla de nuestras comunidades, se comprende allí como una metáfora relacional que expresa prácticas de resistencia y de re-existencia. Cuando las niñas, los niños y sus familias narran juntos lo vivido, nombran las pérdidas, reconstruyen vínculos y proyectan futuros, están haciendo algo más que recordar. Están configurando su posición frente al mundo. El acto mismo de narrar produce subjetividad.

Detrás de esta apuesta esta la hermenéutica ontológica política, una manera de investigar que articula comprensión e intervención. Investigar, desde esta perspectiva, es participar en la co-construcción de mundo. El relato tiene potencia generativa, y quien investiga no extrae información de los sujetos, sino que crea, junto con ellos, condiciones para la producción compartida de sentido. Gracias a esta mirada podemos reconocer que prácticas aparentemente alejadas de la política, como el juego, el cuidado o la narración, participan en la configuración de subjetividades políticas orientadas hacia la paz.

La escuela, el juego y la memoria como territorios de paz

Si la paz se construye en las relaciones cotidianas, ¿dónde ocurre eso concretamente? La obra de Cami señala tres escenarios que merecen atención especial.

El primero es la escuela. En la investigación colectiva *Las escuelas como territorios de paz* (2012), en la que tuvimos ocasión de participar con ella y otros colegas del CINDE, la escuela

aparece como un escenario contradictorio. Allí pueden reproducirse dinámicas de violencia, pero también pueden florecer prácticas de acción colectiva orientadas a la paz. La escuela se convierte en territorio de paz cuando habilita espacios de diálogo donde niñas y niños construyen acuerdos mínimos para la convivencia, negocian conflictos y experimentan el reconocimiento mutuo. En contextos donde la guerra niega sistemáticamente el reconocimiento, ser escuchado y valorado en la escuela es, en sí mismo, una práctica de resistencia frente a la deshumanización.

Trabajos investigativos y colectivos posteriores, como el realizado es Expedición pacifica en (2022), profundizaron esta comprensión al mostrar el potencial de la memoria en la escuela con primera infancia. La memoria, en esta perspectiva, es más que recuerdo del pasado. Es un recurso político que incide en cómo niñas y niños se posicionan frente al presente y proyectan futuros posibles.

El segundo escenario es el juego reconocido como práctica social donde niñas y niños negocian reglas, amplían su círculo ético y ensayan formas de participación. Esta decisión tiene implicaciones políticas profundas, porque validar el juego como espacio legítimo de producción de conocimiento significa validar las formas propias de expresión de la infancia, en lugar de exigirle que hable como hablan los adultos para ser tomada en serio.

El tercer escenario es la imaginación de futuros. Frente a la idea de que la guerra clausura el porvenir, las investigaciones sobre futuros posibles mostraron que niñas y niños poseen un potencial creativo que les permite imaginar y producir alternativas. La construcción de paz requiere imaginar lo que todavía no existe, y en esa tarea la niñez tiene mucho que enseñarnos.

Investigar también es construir paz

Hay un último aporte que atraviesa todos los anteriores y que quizás sea el más retador para quienes trabajamos en la academia. En la obra de María Camila, la metodología no es una fase instrumental posterior a la teoría. Es la prolongación práctica de una ética. Si afirmamos que niñas y niños son sujetos políticos, entonces la investigación debe tratarlos como interlocutores válidos y no como objetos de estudio. Si afirmamos que la subjetividad se produce en las relaciones, entonces el proceso investigativo mismo debe cuidar sus relaciones, evitar la revictimización y privilegiar preguntas orientadas a las capacidades y a los horizontes de acción.

Esta coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace al investigar es una de las marcas más hondas de su legado. La investigación, cuando habilita participación genuina, escucha respetuosa y construcción colectiva de sentido, se convierte ella misma en un escenario de socialización política y en una práctica de construcción de paz. Estudiar la paz y construirla dejan de ser actividades separadas.

Su legado sigue germinando

El pensamiento y la obra de María Camila Ospina-Alvarado ofrecen a los estudios de paz y niñez una propuesta donde la teoría, la metodología y la ética se sostienen mutuamente. De su trabajo aprendimos que la socialización política es un proceso relacional y transformador antes que una transmisión de normas. Que las niñas y los niños de la primera infancia son sujetos políticos presentes, capaces de agencia incluso en los contextos más adversos. Que narrar, jugar y recordar son prácticas que producen paz. Que la escuela y la familia pueden

ser territorios donde se le disputa a la guerra el sentido de la vida en común. Que investigar con la niñez, y no sobre ella, fortalece aquello mismo que se estudia.

Como lo escribió ella misma, las familias que han atravesado la guerra nos han mostrado que todas las vidas merecen ser vividas y que en ellas se expresa la capacidad de aprender del pasado, de no repetir las historias y de anteponer la humanidad como posibilidad de relacionamiento y transformación. Ese es el corazón de su obra. Esa es la semilla que nos deja.

Por ello, su pensamiento y obra sigue en expansión y florecimiento de la mano de su familia, colegas, amigos y estudiantes. Se ha creado el Programa CAMI y la investigación *Aula Viva–Legado CAMI*, para que este legado sigua vivo en seminarios, archivos y comunidades de estudio que hoy dialogan con su obra para formar a nuevas generaciones de investigadoras e investigadores.

Las ideas de María Camila están hechas para caminar entre maestras que cada mañana abren la puerta de un aula rural, entre madres y padres que reconstruyen la vida después del destierro, entre agentes comunitarios que le apuestan a la primera infancia en los territorios.

En tiempos de exterminio, cuando las derechas y sus poderes coloniales quisieran convencernos de que el futuro está cerrado, su obra nos dice algo sencillo y poderoso. La paz no espera a que los niños crezcan. La paz crece con ellos.

Bibliografía

Alvarado, Sara Victoria; Ospina, Héctor Fabio; Quintero, Marieta; Luna, María Teresa; Ospina, María Camila y Patiño, Jhoana Alexandra (2012). *Las escuelas como territorios de paz: construcción social del niño y la niña como sujetos políticos en contextos de conflicto armado*. CLACSO; Universidad de Manizales; CINDE. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20130313112059/LasEscuelascomoTerritoriosdePaz.pdf

Carmona-Toro, Paola Andrea y Ospina-Alvarado, María Camila (2022). La escuela: construcción de paz, potencial de memoria y socialización política con primera infancia. *Revista Colombiana de Educación, 1*(84), 1–18. https://revistas.upn.edu.co/index.php/RCE/article/view/10708

Gergen, Kenneth (2007). *Construccionismo social: aportes para el debate y la práctica*. Universidad de los Andes. https://editorial.uniandes.edu.co

Ospina-Alvarado, María Camila; Luna, María Teresa y Alvarado, Sara Victoria (2022). Salir adelante: subjetividades políticas en primera infancia y familias en el destierro. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 20*(1), 1–25. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.20.1.5012

Ospina-Ramírez, David Arturo y Ospina-Alvarado, María Camila (2017). Futuros posibles, el potencial creativo de niñas y niños para la construcción de paz. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15*(1), 175–192. https://doi.org/10.11600/1692715x.1511016022016

Ospina-Ramírez, David Arturo y Ospina-Alvarado, María Camila (2023). El juego como escenario de construcción de paz en contextos de conflicto armado en Colombia. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 14*(1), 134–152. https://doi.org/10.21501/22161201.3904